

Universidad de Huánuco

Facultad de Ciencias de Ciencias Políticas

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y SU INFLUENCIA EN
LAS DECISIONES JUDICIALES EN EL JUZGADO PENAL
LIQUIDADOR SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO - 2017.

Para Optar el Título Profesional de :
ABOGADO

TESISTA
URETA INOCENTE, Elva Luz

ASESORA
Abog. BERROSPI NORIA, Marianela

Huánuco - Perú
2018



RESOLUCIÓN N° 1028-2018-DFD-UDH
Huánuco, 13 de diciembre de 2018

Visto, la solicitud con Reg. N° 353-18-FD de fecha 13 de diciembre del 2018 presentado por la Bachiller **URETA INOCENTE Elva Luz**, quien pide se Ratifique y se designe a los miembros del Jurado y se señale fecha y hora para sustentar el Trabajo de Investigación Científica (Tesis) intitulado **"PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y SU INFLUENCIA EN LAS DECISIONES JUDICIALES EN EL JUZGADO PENAL LIQUIDADOR SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO - 2017"** para optar el Título profesional de Abogado y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 951-2018-DFD-UDH de fecha 06 de diciembre del 2018 se aprueba el Informe final del Trabajo de Investigación Científica (Tesis) **"PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y SU INFLUENCIA EN LAS DECISIONES JUDICIALES EN EL JUZGADO PENAL LIQUIDADOR SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO - 2017"** formulado por la Bachiller **URETA INOCENTE Elva Luz**, del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, quien posteriormente fue declarada **APTA** para sustentar dicha investigación;

Que, estando a lo dispuesto en el Art. 41 del Reglamento General de Grados y a lo Establecido en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; y la facultad contemplada en la Resolución N° 795-2018-R-CU-UDH, de fecha 13 de julio de 2018;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RATIFICAR Y DESIGNAR a los miembros del Jurado de Tesis para examinar a la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas de la UDH, **URETA INOCENTE Elva Luz** para optar el Título profesional de Abogado por la modalidad de Sustentación del Trabajo de Investigación Científica (Tesis), a los siguientes docentes:

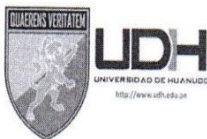
Mtro. (a) Mariella Catherine Garay Mercado	: Presidente
Mtro. (a) Jhon Fernando Meza Blacido	: Vocal
Mtro. (a) Ruth Mariksa Montaldo Yerena	: Secretaria

Artículo Segundo.- SEÑALAR el día jueves 20 de diciembre del año 2018 a horas 11.00 a.m. dicha sustentación pública se realizará en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza.

Regístrese, comuníquese y archívese



DISTRIBUCIÓN: Of. Mat. Y Reg. Acad., PESD, Ofic., Desc., Exp. Graduando, Interesado, Jurados (3), Asesor, Archivo, FCB/mgm



ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS

En la ciudad de Huánuco, siendo las once horas del día 20 del mes de Diciembre del año 2018, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad Universitaria La Esperanza, en cumplimiento de lo señalado en el Reglamento General de Grados y Títulos de la Universidad de Huánuco, se reunió el Jurado Ratificado integrado por los docentes:

Mtro. (a) Mariella Catherine Garay Mercado : (Presidente)
Mtro. (a) Jhon Fernando Meza Blacido : (Vocal)
Mtro. (a) Ruth Mariksa Montaldo Yerena : (Secretario)

Nombrados mediante la Resolución N° 1028-2018-DFD-UDH de fecha 13 de diciembre de 2018, para evaluar la Tesis intitulada **"PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y SU INFLUENCIA EN LAS DECISIONES JUDICIALES EN EL JUZGADO PENAL LIQUIDADOR SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO - 2017"** presentado por la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, **URETA INOCENTE Elva Luz** para optar el Título profesional de Abogado.

Dicho acto de sustentación se desarrolló en dos etapas: Exposición y Absolución de preguntas; procediéndose luego a la evaluación por parte de los miembros del jurado

Habiendo absuelto las objeciones que le fueron formuladas por los miembros del jurado y de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias, procedieron a deliberar y calificar, declarándolo (a) Disputado por Unanimidad con el calificativo cuantitativo de Disculpe y cualitativo de Muy Bueno.

Siendo las 12:30 horas del día 20 del mes de Diciembre del año 2018, los miembros del jurado calificador Ratificados firman la presente Acta en señal de conformidad.

Mtro. (a) Mariella Catherine Garay Mercado
PRESIDENTE

Mtro. (a) Jhon Fernando Meza Blacido
VOCAL

Mtro. (a) Ruth Mariksa Montaldo Yerena
SECRETARIA

ÍNDICE

	PAG.
Índice	2
Dedicatoria	4
Agradecimiento	5
Resumen	6
Abstract	7
Introducción	8
I: Problema de la Investigación	
1.1 Descripción del problema	9
1.2 Formulación del problema	11
1.3 Objetivo general	12
1.4 Objetivos específicos	12
1.5 Justificación de la investigación	12
1.6 Limitación de la investigación	13
1.7 Viabilidad de la investigación	14
II: Marco Teorico	
2.1 Antecedentes de la investigación	15
2.2 Bases teóricas	16
2.3 Definiciones conceptuales	47
2.4 Hipótesis	48
2.5 Variables	48
2.5.1 Variable dependiente	48
2.5.2 Variable independiente	48
2.6 Operacionalizacion de variables	49
III: Materiales y Métodos	
3.1 Tipo de investigación	50
3.1.1 Enfoque	50
3.1.2 Nivel De Investigación	50
3.1.3 Diseño De Investigación	50
3.2 Población y muestra	51
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos	52
3.4. instrumentos de recolección de datos	52
3.5. Procesamiento y Análisis de los Resultados.	53
IV: Resultados	
4.1 Procesamiento de datos	54
4.2 Prueba de hipótesis y contrastación de hipótesis	67

V: Discusion de Resultados	
5.1 Contrastación de los resultados	72
Conclusiones	76
Recomendaciones	78
Instrumentos de Recolección de Datos	79
Cuestionario de Decisiones Judiciales	80
Bibliografia	81
Anexos	84
Matriz de consistencia	85

DEDICATORIA

Agradezco a Dios por su grandiosa bendición por ser mi guía y orientar mi camino al bien, a los maestros de la Universidad de Huánuco por su valioso aporte en la formación profesional de calidad; quienes con su amplio conocimiento permitieron culminar satisfactoriamente con este objetivo.

A toda mi familia por su comprensión y apoyo en todo aspecto que me permitieron consolidar para cumplir con este objetivo. A esta primera casa superior de estudios que es mi alma mater por permitirme realizar estudios que consolidaron el desarrollo final de la presente tesis. A todos los que de una y otra forma han intervenido y contribuido para el cumplimiento de esta tesis.

La tesista

AGRADECIMIENTO

Esta tesis se la dedico a mi amado Dios que con su maravillosa bendición me permitió cumplir con este objetivo, muy a pesar de muchos obstáculos que se me presentaron.

A mi padre Nicolás un verdadero maestro que Dios me permitió gozar de su maravillosas y muy acertadas enseñanzas. A mi madre, Enma; por su gran apoyo incondicional y por sus consejos, al igual que sus aportes en mi formación profesional. A mis hermanos Nilton y Mercedes profesionales de amplia trayectoria que siempre me supieron conducir con sus sabios consejos.

A mi hijo Nicolás; mis inspiración y artífice de mis pequeños logros.

La tesista

RESUMEN

El presente trabajo de investigación contiene el informe de **“PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y SU INFLUENCIA EN LAS DECISIONES JUDICIALES EN EL JUZGADO PENAL LIQUIDADOR SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO-2017”**

El objetivo en el que se enmarcó fue establecer en qué medida los principios del derecho penal influyen en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco 2015- 2017, el tipo de investigación fue aplicada que trabaja sobre realidades de hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Se trabajó con una muestra de 198 habitantes entre abogados y magistrados, como técnica se utilizó la encuesta y como instrumentos de recolección de datos se utilizó el cuestionario, la técnica para el procesamiento y análisis de información fue métodos y procesos de estadística descriptiva como son los gráficos y tablas en SPSS

Dentro de ello se determinó Los principios del derecho penal influye significativamente en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015-2017.

Palabras claves: Derecho penal, decisiones judiciales. seguridad jurídica, motivación de sentencias, criterios normativos, principio de igualdad.

ABSTRACT

This research paper contains the report "Principles of criminal law and its influence on judicial decisions in the Criminal Court liquidator of the SUPERIOR Court of Justice of PASCO-2017"

The objective in which it was framed was to establish the extent to which the principles of criminal law influence the decisions Judicial in the Criminal Court liquidator supra provincial of the Superior Court of Justice of Pasco 2015-2017, the type of research was applied that works on realities of facts, and its fundamental characteristic is to present a correct interpretation. We worked with a sample of 198 inhabitants between lawyers and magistrates As a technique the survey was used and as data collection tools The questionnaire was used, the technique for processing and analysis of information was descriptive statistical methods and processes such as charts and tables in SPSS

Within this the principles of criminal law were determined to have a significant influence on judicial decisions in the Criminal Court liquidator supra provincial of the Superior Court of Justice of Pasco, 2015-2017.

Keywords: criminal law, judicial decisions. Legal certainty, motivation of sentences, normative criteria, principle of equality.

INTRODUCCIÓN

La presente tesis intitulada **“PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y SU INFLUENCIA EN LAS DECISIONES JUDICIALES EN EL JUZGADO PENAL LIQUIDADOR SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO-2017”** es una investigación muy rigurosa donde se explica conceptos, criterios, opiniones, fundamentos jurídicos, doctrinarios, etc., para aportar de esa manera en el área del Derecho de nuestro País.

En la presente tesis se desarrollará el planteamiento del problema, el marco teórico, la metodología de la investigación que es aplicada, con un enfoque cuantitativo y cualitativo, con un nivel de investigación descriptiva – correlacional y con un diseño no experimental, la discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones.

Espero que el presente trabajo de investigación sirva como fuente para posteriores trabajos relacionados a este tema y a la vez también sirva como aporte jurídico a la sociedad.

La tesista

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA

1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA.

El tema de estudio es la predictibilidad de los fallos judiciales, y ésta se encuentra adheridos a los principios de la libertad, la seguridad y la igualdad

Para empezar, inicio en la cuestión de la causa de las sentencias judiciales, la discrecionalidad judicial, los elementos y significados de la seguridad jurídica y los precedentes; profundizando en el tratamiento dado a la predictibilidad del Derecho por el objetivismo jurídico especialmente por Frank y Llewellyn.

El valor poseído por la predictibilidad de las decisiones judiciales se une a la seguridad obtenida en sus destinatarios, podríamos decir que el principio jurisdiccional que guía la actividad de los órganos que estudiamos es el desempeñar la garantía de cierre del sistema interviniendo la corrección de los márgenes de desviación e ilegitimidad jurídicas en que otros poderes o los otros individuos han incurrido. En definitiva, las garantías jurisdiccionales se dividen en dos dimensiones, en la medida en que constituyen una corrección jurídica y contribuye una solución a las disputas de derechos e intereses, originándose el problema de fondo si los jueces están legitimados para producir Derecho.

Hallándose en la opinión pública un desconocimiento de los principios doctrinarios del derecho; es decir del conocimiento sistemático y científico del derecho; se presentan constantes controversias en la realidad en los procesos judiciales en el distrito judicial de Cerro de Pasco. La inacción de la comunidad y de la sociedad en pleno hace que los magistrados emiten resoluciones de manera desproporcional perjudicando a gran cantidad de los justiciables. El desconocimiento de los principios doctrinarios del derecho limita la resolución pertinente cuando los magistrados resuelven las sentencias. Además existen otras causas de orden personal y

académico profesional debido a la inadecuada y/o irregular selección, promoción y ascensos de los magistrados.

Las críticas de la sociedad en su todo es al Poder Judicial, ya que son exageradas la supervivencia de las denuncias constantes de prevaricato, corrupción, tráfico de influencias y fallos cuestionados por la comunidad jurídica y la ciudadanía, así como también la resolución de las sentencias a favor o en contra de los usuarios o partes del proceso; quiénes contribuyen a forjar una imagen negativa generalizada de la magistratura, que afecta el grado de confiabilidad en la función jurisdiccional y justifica el juicio negativo sobre la aptitud personal, ética, moral y profesional del juez. Se debe reconocer que el Poder Judicial no es un poder claro y contundente; pues en realidad éste se concentra en el Ejecutivo y el Legislativo. Al carecer de autonomía e independencia efectiva la judicatura es una función sin poder aunque la doctrina y el ordenamiento jurídico formalmente lo reconocen como tal. Su dependencia también se manifiesta en la retribución de recursos, siempre recortados que no le permiten alcanzar sus objetivos; y porque en la selección, nombramiento, evaluación, ascenso y separación de la función jurisdiccional participan otros poderes y organismos autónomos como el Consejo Nacional de la Magistratura, que ha sido diseñado para negarle autonomía e independencia, para manipularlo y servir intereses perversos.

El problema central de la presente investigación aborda un tema de carácter dogmático y doctrinario, referido al análisis resolutorio de la producción jurisdiccional, desde una óptica para nosotros prevalente, referida a la fundamentación y argumentación doctrinaria del derecho de un tipo específico de resoluciones jurisdiccionales que culmina con la sentencia; en el cual se localiza la razón del derecho propiamente dicho.

Con la investigación aspiro concretar la fundamentación y argumentación doctrinaria de las sentencias en los aspectos precitados, entre otras razones, porque consideramos que este tipo de resoluciones constituye un valioso indicador de la formación, capacidad, actualización e idoneidad de nuestros magistrados; por el hecho lógico de la aplicación de los principios partiendo de la presunción ante la explosión demográfica de abogados

egresados de Facultades de Derecho de las diversas universidades. con sus respectivas ramificaciones a nivel nacional en: sedes, subsedes, sucursales, anexos y hasta modalidades de educación a distancia y evaluación por Internet, que la formación profesional de nuestros colegas es deficiente y que la profesión hace tiempo se saturó, pauperizándose el ejercicio profesional y la estimación social de la noble función forense.

La dogmática jurídica sirve de sustento imprescindible para elaborar una alternativa de solución partiendo del derecho objetivo; pero que trasciende el contenido semántico de la norma mediante el estrujamiento global de la experiencia jurídica, que es la conjugación dialéctica del fenómeno social, el valor y la norma positiva.

Hay la obligación de conocer todos estos principios para resolver de manera correcta una resolución judicial sin perjudicar a los justiciables el derecho que se le asigna como tal cuando los magistrados causan indefensión al instante de emitir resoluciones judiciales eso significa que no aplican correctamente los principios doctrinarios del derecho.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

121. PROBLEMA GENERAL:

¿En qué medida los principios del derecho penal influyen en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017?

122. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

PE₁ ¿En qué medida los principios del derecho penal influyen en la seguridad jurídica en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017?

PE₂ ¿En qué medida los principios del derecho penal influyen en la motivación de sentencias en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017?

PE₃ ¿En qué medida los principios del derecho penal influyen en los criterios normativos del juzgador en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017?

1.3. OBJETIVO GENERAL:

OG. Establecer en qué medida los principios del derecho penal influyen en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco 2015- 2017.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OE₁ Determinar en qué medida los principios del derecho penal influyen en la seguridad jurídica en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017

OE₂ Establecer en qué medida los principios del derecho penal influyen en la motivación de sentencias en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017.

OE₃ Analizar en qué medida los principios del derecho penal influyen en los criterios normativos del juzgador en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017

1.5. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN.

La presente tesis adquiere importancia, porque el juzgador al momento de individualizar las sentencias judiciales se tendrá en cuenta los principios doctrinarios del derecho para resolver adecuadamente la sentencia, con la intención de superar sus deficiencias y mejorar la administración de justicia, considerándolo como un servicio básico esencial para construir el Estado democrático de derecho, así como se puede apreciar de la sentencia judicial expedida del primer juzgado penal liquidador transitorio de Yanahuanca, con expediente N° 0093-2011-0-2902-JR-PE-01, con sentencia N° 31-2014-1JPLTYHCA-CSJIPA, con expediente N° 00030-

2006-0-2902-JR-PE-01, con sentencia N° 0014-2015-1JPLTYHCA-CSJPA, con expediente N° 00159-2010-0-2902-JR-PE-01, con sentencia N° 002-2015-1JPLTYHCA-CSJPA, y entre otros, encontrados en el cuadro de matriz en el anexo.

El nivel de producción jurisdiccional mejoraría, si se tomara en cuenta en la riqueza conceptual que aporta la doctrina jurídica para la conclusión de la controversia sea de manera compleja, dinámica y conflictiva en la realidad social subsumida en la Litis, que exige una decisión que promueva la justicia, la paz y la práctica de la solidaridad, pilares sobre los que se construye la paz social con justicia en la sociedad democrática contemporánea.

Una resolución judicial demuestre un razonamiento jurídico porque el magistrado debe diligenciar en determinado sentido una causa; que además de señalar los artículos en aplicación de los cuales abstractamente se dicta sentencia, persuada a las partes de la legitimidad y la sensatez de su pronunciamiento con la aplicación de los principios doctrinarios del derecho. Lo que se procura es revertir la situación crítica de la institución judicial pasqueña y se recuperará gradualmente la confianza de la ciudadanía, por tener un alto valor e importancia en nuestro medio las sentencias judiciales.

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACION

- a) Escaso material bibliográfico especializado respecto al problema abordado, dificultara la construcción sólida del marco teórico; pero se superara accediendo a las bibliotecas virtuales.
- b) Poca disponibilidad de tiempo del investigador frente a la recargada labor; sin embargo se aprovechara los días no laborables a fin de culminar con el trabajo deseado.
- c) Escasa disponibilidad docentes para la asesoría en la parte metodológica de la investigación dificultara concretar mi trabajo de una forma más adecuada; sin embargo se buscara docentes de otras facultades para una adecuada orientación y asesoramiento.

1.7. VIABILIDAD DEL PROBLEMA

La investigación es viable porque se tendrá la predisposición del investigador, el apoyo permanente de los especialistas y jueces de la Corte Superior de Justicia de Pasco, sobre todo el involucramiento de la revisión de los expedientes, que en todo momento mostraran su participación activa durante la aplicación del instrumento.

CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los antecedentes del presente trabajo de investigación tienen limitaciones por el simple hecho del desconocimiento de la filosofía del derecho, la lógica jurídica y las argumentaciones jurídicas. Entonces hay la obligación de conocer con amplitud los principios, las categorías, las doctrinas y las jurisprudencias del derecho propiamente dicho. Para mejor resolver las cuestiones de la sentencia judicial.

De las pesquisas realizadas a fin de encontrar referencias sobre publicaciones en torno al tema de tesis hemos encontrado escasa producción literaria siendo la obra que más se aproxima a nuestra indagación la de Miguel Torres Méndez: Jurisprudencia literaria y filosófica, razón por la cual consideramos que se aplica de un área de estudio poco explorada por los especialistas, que merece ser abordada mediante un sistemático estudio de carácter doctrinario, para determinar la naturaleza, estilo y características de las resoluciones judiciales y superar sus actuales limitaciones.

Las fuentes de información fundamentales para la indagación serán de preferencia las obras sobre doctrina del Derecho Procesal y los Tratados en materias jusfilosóficas y axiológicas o estimativa jurídica, que reseñamos en la bibliografía básica del Plan de Tesis. Además hay que conocer que los principios jurídicos son ideas principales, postulados éticos o principios fundamentales, básicos y positivizados o no, que condicionan y orientan la creación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico escrito legal y jurisprudencial.

2.2. BASES TEÓRICAS

La investigación propuesta tiene su fundamento en las teorías filosóficas del derecho, especialmente en la teoría tridimensional del derecho, desarrollada principalmente por Miguel Reale y Carlos Fernández Sessarego, de Carlos Cossío y de Torres Vallejo que conciben al derecho como la armónica y dinámica interacción dialéctica de sus tres elementos interactuantes: el hecho social, el pleno valorativo y la norma positiva, que constituyen los componentes que constituyen la experiencia jurídica. Estas razones son indispensables para mejor resolver las sentencias como fines del derecho, a donde debe llegar todo ser humano valiéndose del derecho. Nosotros sabemos que en nuestra realidad jurídica son principios: la buena fe, la equidad, la confianza, vivir íntegramente, no hacer mal a nadie, dar a cada uno lo suyo, del respeto recíproco de la soberanía de la voluntad contractual, del honor, de la justicia, de la libertad, etc. Entonces todos los juristas y magistrados requieren conocer la teoría analítica de la interpretación del derecho, expresada con meridiana claridad por el maestro de la Universidad de Pisa Michele Taruffo, que parte de la premisa según la cual, interpretar un enunciado normativo no significa reseñar lo que ella significa, sino adscribir a aquel un significado.

La actividad decisoria no es declarativa, sino creadora de derecho, en cuanto crea y escoge el significado que será atribuido a la norma; de tal forma se excluyen los significados objetivamente dados, que son descubiertos y declarados por el juez. Estas razones son propias de la sentencia remitida por el magistrado en cualquier caso, sea este de carácter penal. (Michele Taruffo: 2005; 107).

La doctrina del derecho procesal relativa a la naturaleza jurídica de las resoluciones judiciales; y en especial la jusfilosofía y la lógica jurídica constituirán los principales aportes de la ciencia jurídica al marco teórico donde se inscribe el tema de la tesis.

La fundamentación de las sentencias penales conlleva dos estipulaciones: expedir el material probatorio describiendo su capacidad y merituarlo necesariamente. Modernamente, con principio, hallándose una firme tendencia a deducir, promover y argumentar desde la Constitución y los Pactos Internacionales. En la motivación, debe tenerse en cuenta lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al decir que “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”.

El material jurídico constituido por normas, directrices y principios siempre resulta suficiente para resolver correctamente los problemas que se presenten en el derecho. Carlos Cossío también considera que siempre existe una solución para cualquier conflicto, pero es el Juez el que se confía de darla.

“Si un juez puede ser justo, es porque su demostración deja siempre un margen a la decisión personal e indelegable; decisión por la cual debe responder moralmente... siempre será una decisión personal”

“Los principios son preceptos de optimización, con validez prima facie, que ordenan la ejecución de su contenido en la mayor medida posible, en relación con las posibilidades jurídicas y tácticas. En tanto las reglas son preceptos definitivos que se adaptan mediante subsunción, los principios son mandatos prima facie que se adhieren mediante la ponderación”.

El tema de los principios ha apropiado un impulso inusitado en los últimos años, fruto de dilemas políticos y desarrollos epistémicos que confluyeron justo en el período de crisis de las democracias occidentales durante la primera mitad del siglo XX. (CASTILLO ALVA, José. 2008).

Se tiene en cuenta el discurso político que interpone el neo iusnaturalismo principialístico y su rango con respecto a la regla, se estudiarán las diversas respuestas que en el campo teórico se han dado a la pregunta por la jerarquía entre los mismos principios (acápites tres). Algunos se ampararán una jerarquía de la justicia, otros el de la libertad y como posición mayoritaria están los que sujetan que no hay jerarquía alguna ora porque en caso de haberla se quebrantaría la pluralidad (valor democrático por

sublimidad según esta corriente), ora porque la justicia no es un principio sino sólo un valor. Se examinara cada una de estas actitudes indicando sus debilidades, hasta llegar al planteamiento que mueve este escrito en el contexto indicado (que es lo probable dentro de un esquema social, donde la academia es uno de los muchos elementos que interactúan en él, por lo cual debemos ir más allá de las escuelas generales del Derecho para dilucidar en el plano práctico una posible salida al dilema ya planteado): defender la suprema de la justicia partiendo de la historicidad de los conceptos jurídicos y teniendo en cuenta el imaginario social y la representación colectiva' que al respecto se ha tenido en la cultura occidental, que ha representado cómo la justicia es el núcleo axiológico del derecho.

221. JERARQUÍA DE LOS PRINCIPIOS JURÍDICOS.

El principio de jerarquía normativa es un principio constitutivo fundamental para asignar al ordenamiento jurídico de seguridad jurídica. Es un principio fundamental que propone una gran seguridad jurídica debido a su enorme sencillez.

La concomitancia de diversas fuentes sugiere el problema de su decreto jerárquico. Según el principio de jerarquía normativa, que ocupa la Constitución, las normas jurídicas se organizan jerárquicamente, de forma tal que las de inferior rango no pueden transgredir a las superiores, su peligro de nulidad. Ejerce entre la Constitución y las normas primarias (Ley o normas con fuerza de ley) y entre la Ley y las normas con fuerza de ley y las normas secundarias (Reglamentos). A su vez, las normas que tienen el mismo rango dominan la misma fuerza normativa y en caso de incoherencia insalvable predomina la posterior, ya que se comprenderá que ha derogado a la anterior. La estructura jerarquizada tiene una forma piramidal, cuya cumbre es la Constitución, norma suprema que se aplica a todas las demás. El respeto del principio de jerarquía es requisito de validez de las normas jurídicas.

222 PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.

El proceso de integración y aprehensión sobre los principios generales del derecho, nos conlleva a serias reflexiones, respecto a qué debemos de entender por éstos. Así es como nos implicamos a los problemas del conocimiento que se originan, en relación, a las cuestiones: ontológicas, gnoseológicas, y teleológicas, en relación a los principios generales del derecho. Consecuentemente, nos damos cuenta que éstos, forman parte esencial, es decir, sine qua non, de todo ordenamiento jurídico. De esta manera, dichos principios son fuente de sugestión de las demás normas del sistema jurídico.

"...pero las legislaciones de todos los países, al exponer los principios generales del derecho, como fuente supletoria de la ley, no indican cuales sean dichos principios, qué características deben tener para considerarse como tales, ni qué criterio debe inferirse en la fijación de los mismos; por lo que el problema de disponer lo que debe entenderse por principios generales del derecho, siempre ha presentado serios escollos y dificultades, puesto que se trata de una exteriorización de sentido vago e impreciso...". (ALVA MATTEUCCI, Mario.2010).

El principio de confianza, como base de una "responsabilidad por confianza", es sólo una entre varias estructuras de este principio. Se contiene como un elemento incorporado en el principio de "buena fe", donde a su vez se halla una expresión especial en las doctrinas de la "caducidad" y en la prohibición del **"venire contra factum proprium"**. De un modo diferente se revela también cuando se trata de la prohibición de retroactividad de leyes onerosas.

La "armonía" de principios manifiesta que, en el conjunto de una regulación, no sólo se añaden, sino que también se impiden recíprocamente. Hasta qué punto sea éste el caso, es, en primer lugar, un aspecto de su orden jurídico interno siempre que esa armonía se deduce de la regulación legal; luego lo es de la

delimitación por medio de regulaciones particulares o por medio de la jurisprudencia de los tribunales. Requiriendo para esto valoraciones complementarias en cada grado de concretización, que se llevan a cabo, en primer lugar, el legislador y, sólo después, el juez, en el marco de un margen de libre enjuiciamiento que, de acuerdo con ello, le queda.

Si bien los principios jurídicos, por regla general, tienen también la naturaleza de ideas jurídicas directivas, de las que no se obtienen inmediatamente resoluciones para un caso particular, sino sólo en virtud de su concretización en la ley o por la jurisprudencia de los tribunales, existiendo principios que, condensados en una regla inmediatamente aplicable, no sólo son **ratio legis**, sino que ellos mismos son /ex. Yo los llamo "principios en forma de norma jurídica". Norberto Bobbio, tal ordenamiento, amparado o decretado por el Estado; o sea, nuestro ordenamiento, tanto privado como público, entregará al intérprete todos los elementos obligatorios para la búsqueda de la norma reguladora. Por lo que respecta al aspecto Teleológico o Finalístico de los principios generales del derecho vamos a reconocer dicha perspectiva desde el contenido valorativo de éstos, en donde se deja entre ver la necesidad de **realizar** como fin **máximo del orden jurídico a la** justicia, en **contraposición de** todo aquello, que apunta a lo desigual, injusto e ilegal. Por cierto, no debe extrañarnos que el conocimiento de los principios generales del derecho se orienta a cuestiones ético jurídico, a este respecto, es suficiente citar entre otros a los siguientes: Buena Fe, Recta Razón, Proporcionalidad, etc.

Nicolás Coviello valora que: "Los principios generales del derecho son los principios esenciales de la misma legislación positiva, que no se encuentran escritos en ninguna ley, pero que son los presupuestos lógicos necesarios de las diferentes normas legislativas, de las cuales en fuerza de la abstracción deben exclusivamente deducirse".

Francisco Camefutti, expresa que los principios generales del derecho no son algo que exista afuera, sino en sí mismo derecho escrito, ya que provienen de las normas constituidas. Se encuentran dentro del derecho escrito como el alcohol dentro del vino, son el espíritu o la esencia de la ley". Ahora bien, para algunos autores como: Puíg Peña, Ruggiero, Isidro Montiel y Duarte, Roberto Esteva Ruiz, Ignacio Burgoa, consideran a los principios generales del derecho, como aquellos que, por inferencia, desligándonos de las leyes mismas, que constituyen los sistemas de derecho positivo. Es por ello, que éstos, se constituyen en fuente de colación de las lagunas de la ley o como supletoria de la falta de éstas para solucionar los conflictos jurídicos en los términos del cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la tetra establece: "En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva será conforme a la tetra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se establecerá en los principios generales del derecho".

Federico de Castro y Bravo, considera que; 'Tenemos como primer precedente de los principios generales del derecho a Grecia. Ciudad en que se concibe al Derecho como una manifestación del orden universal, establecido por dioses, o la ley general en el ordenamiento jurídico de cada ciudad; a pesar de lo anterior, se reconoce la presencia de la ley escrita y de la no escrita, derivada de la naturaleza, basada en la equidad y la tradición, o impuesta por las convicciones morales y religiosas.

223. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO.

Federico de Castro y Bravo, clasifica los principios generales del derecho en tres categorías:

- Los del derecho natural, los cuales son eternos, inmutables y perfectos.
- Los tradicionales, que incluyen costumbres, convicciones y aspiraciones de la colectividad.

- Los relacionados a la Política, referidos a los manifiestos en las leyes políticas.

Comenta: Si en vez de repartir los principios generales del derecho ocupando a las diversas ramas de los derechos privado y público, hacemos uso del criterio material en un sentido más amplio, podremos obtener la clasificación siguiente:

Primero: Principios generales de derecho substancial: que establecen máximas para el proceder de los particulares (como, por ejemplo, la prohibición de actos que impliquen el llamado abuso de un derecho).

Segundo: Del derecho procesal, dentro de cuyo grupo hay que incluir, en opinión de Bobbio, las reglas generales de carácter hermenéutico (por ejemplo: el de no juzgar dos veces el mismo caso, en caso de duda debe beneficiarse el acusado, etc.)

Tercero. De organización (Por ejemplo el de heterotutela en los ordenamientos estatales, el de la separación de poderes en el Estado de Derecho o el de la irretroactividad de las leyes). (TORRES VÁSQUEZ, Aníbal, 2008)

García Máynez, comenta: Estamos de acuerdo con Bobbio en que los principios generales haciendo uso con fines hermenéuticos y de integración tienen naturaleza normativa, pero, cabe resaltar que las resoluciones de los jueces deben, en todo caso, basarse en normas, juicios o principios generales de índoles enunciativas no pueden, servirles nunca de fundamento. Sin embargo, para el autor en comento, hay principios de carácter totalmente diferente, los lógicos - jurídicos y antológicos - jurídicos que manifiestan conexiones básicas de índole formal entre los preceptos del derecho y las modalidades de lo aceptado, lo prohibido, lo ordenado y lo potestativo.

Los principios generales del derecho dentro del contexto de la función interpretativa, ejercen una participación relevante, ya que, todo precepto jurídico encierra un sentido, pero éste no siempre se halla expuesto con claridad, si la expresión es verbal o escrita puede acontecer que los vocablos que la integren posean acepciones múltiples, o que la construcción sea deficiente y haga difícil la inteligencia de la frase.

Entonces diremos que los principios generales del derecho son determinantes (entre otros) en la interpretación jurídica, ya que su presencia, en forma consciente o inconsciente, va a ser la espesamiento de lo que un sistema ha consagrado como la finalidad del derecho y que a la vez en su punto de partida y, por consecuencia su base interpretativa.

En diversos puntos de la argumentación del tribunal se hicieron las siguientes referencias a patrones:

"Nosotros debemos recordar el principio general de que en supervisión de fraude, quien no desea leer el contrato antes de firmarlo no puede luego librarse de sus cargas". "Al aplicar dicho principio, la tesis básica de la libertad de contratación es un factor de importancia";

La naturaleza jurídica de los principios generales del derecho, les permite a éstas, ser apreciados como principios fundamentales para la construcción de cualquier sistema jurídico. Además, cabe destacar que los principios generales del derecho, agrupan las características de ser generales, impersonales y abstractos.

Los principios generales del derecho tienen varias funciones y son a saber: integradora, interpretativa, directiva y limitativa y se consideran como objeto de estudio y análisis en cuanto a una taxonomía didáctica, por un lado, desde una expectativa amplia y por el otro, desde una expectativa específica. Por lo que respecta, a la clasificación más amplia, cabe hacer mención, entre otros, de los siguientes principios generales del derecho: la dignidad humana, la

libertad, la igualdad, la seguridad y certeza jurídica, la justicia y la equidad.

224. LA CONCEPCIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL.

“El objetivo principal del Estado social de Derecho es la obtención del bienestar general aun cuando para tal función recurra a medidas como intervenciones en la actividad privada, expropiaciones mediante la utilidad social y planificación económica, resultan inevitable para promover y desarrollar el mercado en su nueva dimensión internacional, para desplegar las reivindicaciones económicas, sociales y culturales que determinaron el reconocimiento constitucional y el perfeccionamiento en la representación de los límites en el ejercicio de los derechos fundamentales” (Ansuátegui, 2007: 17).

En la interpretación de constituciones “(...) dotadas de un compacto tema sustancial compuesto por valores, principios, derechos y directrices no es que desaparezcan por completo los límites normativos, pero se mitigan de modo muy notable se hacen más flexibles o dúctiles” (Prieto, 2002: 16).

En el caso de las Constituciones peruanas de 1979 y 1993, la declaración de que la persona es el fin supremo de la sociedad y el Estado, como que puede presentarse a primera vista un homenaje a la retórica, pero que esconde toda una filosofía, porque consagra un amplio catálogo de derechos expresos, sin excluir los demás que la constitución garantiza, ni otros de igual naturaleza o que se instituye en la decencia del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno (derechos implícitos, art. 3 y 4 de la Constitución de 1979).

El concepto de Estado social y democrático de Derecho es consustancial a la teoría contemporánea del Estado, que el Tribunal

Constitucional ha tratado refiriéndose a ella con denominaciones diferentes, entre ellas: Estado constitucional de derecho, Estado democrático de derecho, Estado de derecho, Estado social y democrático de derecho.

El Tribunal Constitucional, en lo que se refiere a las características de su contenido social y democrático, ha señalado:

“El Estado social y democrático de Derecho no elude los principios y derechos básicos del Estado de Derecho, tales como la libertad, la seguridad, la propiedad privada y la igualdad ante la ley, antes bien, procurando obtener su mayor efectividad, proporcionándoles de una base y una capacidad material, a partir de la conjetura de que individuo y sociedad no son categorías aisladas y contradictorias, sino dos términos en implicación recíproca. Así, no hay manera de materializar la libertad si su instauración y resguardos formales no van de la mano con las condiciones de subsistencias mínimas que originen la posibilidad de un ejercicio real (García Pelayo, Manuel. Las transformaciones del Estado contemporáneo. Madrid: Editorial alianza. 1980, p. 26), lo que considera la presencia de un conjunto de principios que instrumentalicen las instituciones políticas, apoyen el sistema jurídico estadual y sustenten sus funciones” (STC. 0008-2003 - Al: 16).

El Estado social y democrático de Derecho permite la unificación del Estado y la sociedad, así como la democratización del Estado. La democracia, por ello, establece un elemento esencial del Estado. Desde esta circunstancia, la democracia despliega una función dual: método de organización política del Estado, es decir, método de elección y designación de sus operadores, y mecanismos para obtener el principio de igualdad en el ámbito social. Así, el principio democrático no sólo avala una serie de libertades políticas, sino que anuncia todo el ordenamiento jurídico-político. De modo que, aun cuando nuestra Constitución no lo implante expresamente, el hecho de que exista una remisión al Estado democrático de derecho como una fuente de interpretación y de identificación de los derechos

fundamentales de la persona (artículo 3º de la Constitución), hace del principio democrático uno que trasciende su connotación primigeniamente política, para dispersarse a todo entorno de la vida en comunidad. De esta forma, nuestra Carta Fundamental lleva comprendido la identificación de una democracia económica, social y cultural.

La historia de la humanidad indica que el Estado no se marchita en sus funciones jurisdiccionales, de policía y de defensa del territorio; asimismo, que no restringe su actividad sólo a respaldar la seguridad interior y exterior del país. El Estado debe ser de ente constituyente del orden político y social, y el normalizador de la estructura social, que confirme el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.

La democracia garantiza la aplicación de cada uno de los derechos fundamentales porque dentro de ella la persona tiene derechos frente a los demás y frente al poder.

“En definitiva, la democracia no es solo política sino también económica, social y cultural. También tiene una dimensión personal o humana muy importante que no ha sido expresamente señalada por el Tribunal en la sentencia citada, crítica Marcial Rubio” (Rubio, 2013: 346 s).

No hay democracia sin consideraciones sociales, especialmente los derechos sociales y económicos, la economía social de mercado y el bien común. Estos no pueden entenderse, en consecuencia, solo como derechos programáticos, es decir, como aspiraciones.

La democracia es un orden social, político, económico y personal de ciudadanos con conciencia y opinión. Si no es así, entonces la democracia se caricaturiza y tiende a desnaturalizarse. Por ello, debe haber libertad de información y de expresión, todos deben poder expresar sus ideas y confrontarlas con las de los demás para concertar las decisiones sociales de importancia. La democracia es un sistema civilizado que pone las razones y argumentos para implantar una convivencia humana basada en las ideas y las

mayorías. Por eso son necesarias personas informadas y participantes. Este aspecto de la democracia sustenta al Estado de Derecho y a la organización jurídica de la sociedad.

El principio de Estado de Derecho instauro el postulado de un dominio de la potestad punitiva al Derecho, lo que dará lugar a los límites provenientes del principio de legalidad, lo que la idea del Estado social es legitimar la función de prevención en la medida en que sea necesario para preservar a la sociedad lo que implica límites que giran en torno a la exigencia de la necesidad social de la intervención penal. Por último, la concepción del Estado democrático exige en lo posible a poner el Derecho penal al servicio del ciudadano, lo que puede considerarse como fuente de límites que se incorporan al respeto de principios como los de dignidad humana, igualdad, racionalidad, humanidad, proporcionalidad, etc.

225. LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.

El proceso para que pueda cumplir su cometido es que sea conducido en forma ordenada y sistemática, debiendo, a su término, ser resuelto por el órgano jurisdiccional. Resolver no es más que juzgar.

Las resoluciones judiciales comprenden desde un simple decreto de mera tramitación, hasta la expedición de una sentencia poniendo fin al proceso.

Son actos jurídicos, pues crean situaciones jurídicas y son procesales, pues se dan dentro del proceso, teniendo como nota característica los ser expedidos por el órgano jurisdiccional.

Es interesante anotar que en todas las resoluciones que expida el Juez y sobretodo en la sentencia se dan las características fundamentales de la jurisdicción desde el *"notio"*, cuando el Juez se avoca el conocimiento, hasta el *"ejecutio"*, todas ellas llevan consigo la característica fundamental de la decisión, así como las notas del mando, pues todas las resoluciones del Juez deben llevar implícitamente un mandato claro y expreso para que puedan

cumplirse. Estas decisiones que expide el Juez son necesarias, ya que gracias a ellas es posible la marcha normal del proceso, orientando o decidiendo ya sea sobre el fondo del mismo o sobre cuestiones incidentales.

Dentro de las primeras se encuentran las citaciones, notificaciones, actuación de pruebas, aceptando o rechazando las que son solicitadas, agregando las pruebas instrumentales, y dentro de las segundas están aquellas en las que el Juez debe determinar sobre problemas de cuestiones prejudiciales, recusaciones, jurisdicción, inhibición, declinatoria de jurisdicción, todas las cuales se expiden por medio de autos, no son otra cosa que la declaración de voluntad emitida por el Juez con el fin de determinar lo que estime conveniente, regular o justo.

El Juez, mediante las resoluciones no hace otra cosa que superponer el derecho al caso concreto encomendado a fin de darle solución. Iniciado el proceso debe hallarse una controversia, que siempre se presenta ante el juego de intereses del denunciante y del denunciado y nadie mejor que una persona imparcial, como el Juez, para que decida sobre los problemas de orden procesal que se presentan.

La misión fundamental del Juez es la de emitir pronunciamiento jurisdiccional que decida las cuestiones de fondo que son objeto del proceso, de allí que las resoluciones judiciales constituyen los actos procesales del Juez de mayor importancia. Sus decisiones son expresiones de la potestad de decisión, y consecuentemente a su poder jurisdiccional.

226. DECISION JUDICIAL.

“La resolución judicial, es el acto jurídico procesal, que emanan del juzgador o del secretario, cuando éste último participa en la emisión de resoluciones de mero trámite como son en la emisión de los decretos”.

“En sentido estricto, resolución judicial, es todo acto procesal del Juez o Tribunal, desde los de mero trámite hasta la sentencia como comprensiva de todas las decisiones y determinaciones que figuran en un expediente” (Palma, 2006: 200). Las resoluciones judiciales, no sólo debe entenderse como actos de decisión del Juez, sino debe comprenderse como todos los actos interlocutorios entre el órgano jurisdiccional y los sujetos del proceso, empezando desde el objeto de

instruir el proceso, decidiendo las cuestiones que se presentan en su desarrollo como el hecho de mandar citaciones, participaciones de conocimiento, agregación de pruebas y piezas que han de formar el expediente, ordenando el cierre de las etapas preclusivas y abriendo etapas de su desarrollo; con el objeto de resolver lo que establece el objeto principal de la causa, dictando la sentencia y ejecutar lo decidido.

Las resoluciones judiciales deben ser dictadas y fechadas a efectos de no incurrir en nulidades posteriores; debiendo encabezarse con la indicación precisa del lugar, día, mes y año en el cual se pronuncian; las que deben ser claras, precisas y concretas, de modo que sean fácilmente comprendidas y no sean objeto de aclaraciones o produzcan dudas o se anulen.

La resolución que expida el Juez que tenga el carácter de definitiva o interlocutoria debe ser motivada, pues estas resoluciones son de fondo y deben tener fundamentación fáctica y jurídico. En cambio los decretos no tienen por qué ser motivados.

Todas las resoluciones judiciales son instrumentales y como todo documento están sometidas a una serie de requisitos como son: llevar la firma del Juez que las expide y la del secretario, ser dictadas por escrito, y aquellas que se expidan durante el juicio oral deben trasuntarse a través del acta que será firmada por los miembros del Tribunal. Los decretos se rubrican los autos llevan media firma y la sentencia firma entera, porque si bien es cierto que sirve para diferenciarlos entre sí, también lo es que todo esto carece de

importancia frente a la exigencia de que las resoluciones sean firmadas por quien decide. Tratándose de Tribunales Colegiados serán firmadas por todos los miembros del Tribunal y autorizadas por el secretario de la Corte, tal como lo hacen los secretarios de Juzgado.

“Las resoluciones, cualquiera que sea su forma, no deben presentar rayaduras ni enmendaduras debiéndose, en todo caso, rehacerse el documento. Las resoluciones deben ser claras y precisas, a fin de que se entienda el mandato que contienen, Está prohibido el dictado de resoluciones generales, a fin de que no se exhiban dudas respecto a su cumplimiento”. (Del Valle, 1976: 111).

Etimológicamente deriva de la palabra "sintiendo" v de allí que conserve el significado de constituir la expresión auténtica y personal del Juez, esto es lo que siente frente a los planteamientos, pruebas y alegatos de las partes.

Sentencia, constituye la resolución de máximo valor e importancia, con la que se pone fin a cada una de las apelaciones por los que pasa un proceso, en virtud de la cual se resuelve de manera concluyente y definitiva, dentro de las respectivas instancias la pretensión punitiva del Estado.

Para nosotros, la sentencia es un acto procesal del órgano jurisdiccional que emana de un Juez o Tribunal competente que pone fin de un modo normal al proceso, en una instancia en donde éste emite un juicio sobre la situación jurídica aplicando la norma pertinente, al procesado.

Como operación mental, no hay diferencia entre el juicio lógico, del Juez en la sentencia y el que pueda formular un particular sobre el mismo caso; pero, mientras el de éste no tiene ninguna trascendencia jurídica; mientras que la resolución emitida por el órgano jurisdiccional contiene una orden que obliga a los actores del proceso; y, en ciertos casos aún a los terceros, a someterse a su mandato, que tiene carácter definitivo y vinculante.

La teoría contemporánea sobre la naturaleza jurídica de sentencia, es mucha más amplia cuando sostiene que toda sentencia judicial, no es

una mera subsunción del hecho al derecho; sino además, es una tarea jurídico- creadora, siendo así, es el juez el verdadero creador y artífice del derecho singular en motivo de que el objeto de conocimiento, no es la norma en sí misma, sino la conducta humana regulada por la norma; por lo que el Juez es el llamado a crear un nuevo derecho en su sentencia, como una ley particular dictada con sentido de justicia, puesto que la sentencia judicial no es el fruto de la sola aplicación de la ley de modo mecánico, sino debemos contar con las circunstancias en que se va aplicar la ley.

La Ley establece las formas que deben revestir las distintas sentencias, tanto en su redacción (formalidades extrínsecas) como en su capacidad (formalidad intrínseca). Ellas tienen por objeto asegurar la recta administración de justicia, obligando al juez a examinar detenidamente la cuestión controvertida y a expresar los fundamentos de decisión a fin de que los justiciables conozcan los motivos justificantes que determinarán el fallo.

Desde el punto de vista formal la sentencia es un documento destinado a constatar la expresión del juicio del Juez sobre la cuestión sometida a su decisión, y como tal recubre los caracteres de un instrumento público, pues se trata de un acto jurídico procesal establecido por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones y en la forma que las leyes perciben sobre el tema en estudio.

De acuerdo con lo establecido en la normatividad civil procesal vigente las actuaciones judiciales sólo pueden practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

El lugar y la fecha deben ser completos, consignando día, mes y año, con claridad y exactitud, expresada en letras y no en números, debiendo corresponder al día en que se firmó la sentencia.

En los procedimientos penales, la normatividad de la materia establece que para la realización de estas diligencias, no existe limitación en cuanto a días y horas hábiles, pues éstas no se aplican, siendo las veinticuatro horas hábiles, para el ejercicio de la acción penal.

La sentencia debe tener requisitos de contenido o materiales y requisitos de forma, que por exigencias externas debe reunir la sentencia para que pueda ser considerada válida. Cuestión controvertida y a expresar las nociones de decisión a fin de que los justiciables conozcan los motivos justificantes que determinarán el fallo.

SEGURIDAD JURIDICA: De acuerdo con Ossorio (2006), "la Seguridad Jurídica viene a establecer la limitación fundamental para la vida y el expansión de las naciones y de los individuos que las de todos los individuos que la integran.

Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que todos los individuos tienen bien claro cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin la presencia de capricho, torpeza o como sucede, por la mala voluntad de los gobernantes que siempre va a causarles perjuicio. A su vez, la seguridad también restringe y diagnostica las facultades y los deberes de los poderes públicos". (p. 873).

Como es lógico, (señala Ossorio, ob. cit.), la Seguridad Jurídica sólo se alcanza en los Estados de Derecho, porque, en los de régimen autocrático y totalitario, las personas están siempre sujetas a la arbitrariedad de quienes detentan el poder o van a detentar el poder.

MOTIVACIÓN DE SENTENCIA: Jordi Ferrer (2011) afirma que un epígrafe que asiente es una de las causas de la determinación o comportamiento humano es, desde luego, un epígrafe descriptivo y, consecuentemente, verdadero o falso. Por ello, la motivación percibida

como expresión de los motivos, las causas, de una decisión es un discurso lingüístico descriptivo. Como tal, no es capaz de acreditar la decisión, puesto que la justificación pertenece al ámbito de lo normativo y no hay salto posible que permita fundar una conclusión normativa en un conjunto de premisas descriptivas. Con ellas entendemos, como máximo, qué llevó al juez a disponer cómo decidió, pero no contribuye nada a la justificación de su decisión. No es raro pues que, en general, los realistas no hayan puesto el acento en la necesidad de que el juez motive sus decisiones, sino en que la sociología del derecho estudie los factores causales que llevan a esas decisiones.

Entendida de este modo, resultaría, por ejemplo, que la Constitución española obliga a los jueces y tribunales manifestar en sus sentencias las motivaciones causales que les llevan a tomar sus decisiones jurisdiccionales. Dado que entre estas motivaciones habrá factores de lo más diversos (que van desde sus traumas infantiles a la presión mediática, desde su ideología a la cultura jurídica adquirida), no entendemos bien qué relevancia social y jurídica tendría para que su expresa formulación fuera requerida constitucionalmente.

CRITERIOS NORMATIVOS Según Julian Esteban (2015)

a) DOCTRINAL O PRIVADA. La interpretación doctrinal o privada, es llevada a cabo por los especialistas o estudiosos del Derecho, mejor dicho por los juristas, pero le falta la trascendencia si no se le aduce en los fallos de los tribunales.

b) JUDICIAL. Es la que ejecutan los órganos jurisdiccionales a través de las sentencias, en las que resuelve las disputas que le son planteados, y en tal sentido el juez constituye el órgano de interpretación de la ley. Esta forma de interpretación y la falta de poder obligar, puesto lo resalta Pascual Fiore, las sentencias que emiten los tribunales no tiene fuerza de ley, ni se pueden hacer extensivas a otras personas, En nuestro país tiene

fuerza obligatoria la jurisprudencia que decreta la Suprema Corte de la Nación, funcionando en pleno, y esa obligatoriedad alcanza a las Salas que lo componen, a los tribunales unitarios y colegiados de Circuito, a los Juzgados de Distrito, a los Tribunales Militares y Judiciales del fuero Común de los Estados, Distrito Federal, tribunales administrativos y de trabajo, locales y federales, siempre que lo decidido se ampare en cinco sentencias (ejecutorias) no interrumpidas por otra en contrario, y que han sido aprobadas por lo menos por ocho ministros, si se trata de la jurisprudencia de Pleno o por cuatro ministros en los casos de las jurisprudencias de las salas, aunque igualmente establezcan jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de salas y de tribunales colegiados. De igual manera, es obligatoria la jurisprudencia establecida por las salas, en las materias de su competencia, cuando lo resuelto se sustente en cinco ejecutorias, no solo para las mismas salas sino también para todos los tribunales señalados anteriormente.

c) AUTÉNTICA. Es la que efectúa la propia ley en su texto, a través de una norma de una naturaleza meramente interpretativa o bien mediante leyes posteriores que concluyan idéntico fin. De allí se dirá que la interpretación auténtica puede ser contextual o posterior. A diferencia de otras, la interpretación auténtica tiene la fuerza obligatoria general

227. LAS DECISIONES JUDICIALES DENTRO DE UN ESTADO DE DERECHO

Las soluciones judiciales en el seno de un Estado de Derecho se ha de tener en cuenta los valores e intereses en pugna, eficientes por el legislador previamente con carácter general y abstracto. Desde esta perspectiva, el Derecho positivo tiene que argumentar a una sistematicidad constructiva de un mecanismo de seguridad que remita a valores, como la libertad, la seguridad y la igualdad.

Viéndolo de esta manera, diremos que por medio de la motivación de las sentencias, se procura que el juzgador manifieste las razones de su decisión apoyándose en el derecho del justiciable y del interés legítimo de la comunidad en entenderlas; que se confirme que la decisión judicial atribuida es consecuencia de una exegesis racional del Ordenamiento; que las partes o la comunidad tengan la información necesaria para invocar, si es procedente, la decisión; y que los tribunales competentes posean la información que se precisa para vigilar la correcta interpretación y aplicación del Derecho.

Efectivamente, en los Estados de Derecho contemporáneos, la motivación de las sentencias es una demanda de los derechos fundamentales para que no produzca la arbitrariedad del Poder, para controlarlo y para garantizar jurídicamente los derechos y libertades de los ciudadanos. La justificación judicial en el plano interno consiste en que la resolución del juez se deduzca de sus proposiciones de acuerdo a las líneas de inferencia que han sido aceptadas, sucediendo un razonamiento lógico que preside la conclusión prevista en el fallo. Sin embargo, requerimos una justificación externa cuando las premisas de hecho y normativas, o ambas de forma simultánea, precisan de argumentaciones nuevas, siendo completa la motivación cuando contiene los dos planos. En esta línea, dice Gascón Abellán que "motivar exige aportar razones lo bastante sólidas para descartar la arbitrariedad y, por consiguiente, también (o sobre todo) las que no avalan la reconstrucción de los hechos que se justifican: la justificación no será completa si no se justifica también por qué no se han atendido estas pruebas".

Pero, yendo más allá, debido a las razones de necesidad de garantizar los derechos de quien es parte en un proceso. Un primer grupo de razones se aclara porque es una garantía del justiciable mediante la cual, sin dañar de la libertad del juez en la interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es

derivación de una exegesis racional del Ordenamiento y no el fruto de la arbitrariedad. Con respecto a una segunda clase de razones, tendríamos que suscribir que un Estado de Derecho implica que los poderes públicos queden sometidos al Derecho y que los órganos jurisdiccionales ejerzan su control, control que sólo se legitima en la aplicación del Derecho y de ahí la necesidad de que hayan de motivar sus resoluciones. Desde la visión del Estado democrático, lo que se pretende es el convencimiento de las partes y de la opinión pública, por lo que si el Poder judicial emana del pueblo, entonces éste debe conocer la forma en la que se ejerce para controlar a sus titulares.

Así, la racionalidad se pormenoriza en función de la consideración de las normas y de los hechos. Los jueces deben razonar discurrendo razones comunicadas argumentativamente y el respeto a la ley no garantiza la racionalidad decisional. La norma puede ser irracional en su contenido, fuera de que en el proceso aplicativo influyan elementos externos, y de que, a menudo, se funde en los criterios de oportunidad y de utilidad ante un conflicto de derechos con la satisfacción del mayor número posible de personas.

Especificando más, estas ideas no se pueden hacer inteligibles de modo integral si no las enmarcamos en el terreno de la discreción judicial, cuyo elemento principal es la elección entre diversas posibilidades reales mutuamente excluyentes, de manera que, en un sentido fuerte, tener discreción significaría que no hay una respuesta correcta. La vinculación recae en la presencia o ausencia de ciertos hechos relacionados con los comportamientos lingüísticos en una comunidad o los actos normativos de una autoridad, y las decisiones judiciales terminan con un fallo que debe justificarse en una norma general. La resolución no puede ser arbitraria, se ha de deducir de las normas previas y de los hechos, aun cuando el juez cree normas generales, decidiendo desde varias de ellas y construyendo un enunciado. Ahora bien, la duda es si son parte del Ordenamiento jurídico. En este nivel de análisis, la respuesta hay que vincularla,

entre otros factores, con los distintos sentidos que tiene la actividad interpretativa.

Al hilo de esta afirmación, la Jurisdicción representa una actividad racionalizadora dirigida a los titulares del derecho a la jurisdicción, siendo de especial importancia a quién le corresponde decir la última palabra en materia de Derecho, lo cual se conecta con la soberanía y

el origen del Ordenamiento, se debe tener en cuenta que, a la hora de abordar si las decisiones judiciales son predecibles, la complejidad crece y se produce alguna confusión porque los modelos de conexión son muy diversos, conllevando respuestas igualmente diferentes según sea la relación entre los jueces y la esfera socio-política. Esa tipología se resume en: El juez *ejecutor*, con "baja creatividad judicial y baja autonomía política", el cual aplica simplemente la voluntad legislativa. Este tipo ha sido sustituido por el modelo "consensual", que defiende la aplicación del Derecho conformada por el punto de vista de la sociedad. El juez *guardián*, con "baja creatividad jurisprudencial y alta autonomía política", caso en el que la aplicación judicial se apoya en los derechos de las partes. El juez *delegado*, con "alta creatividad jurisprudencial y baja autonomía política", el cual procede cuando no existe una respuesta clara de las normas jurídicas, sometido a límites mucho mayores y más rígidos que el legislador. Y *que político*, con "alta creatividad jurisprudencial y alta autonomía política", característico del realismo jurídico norteamericano y del movimiento *Critical Legal Studies*.

De ahí, se advierte que, en cada modelo, la discrecionalidad judicial actúa de forma más o menos intensa. Todo esto plantea problemas en relación con la certeza jurídica y, de forma más amplia, en relación con la seguridad. Realmente, la seguridad ha dejado de ser contemplada, cada vez más, como un valor enemistado con la justicia para pasar a ser observada como un conjunto de dimensiones éticas que vendrían a formar parte de la justicia formal.

No hay duda, pues, de que las exigencias de la seguridad del Derecho constituyen un medio idóneo para garantizar el respeto de algunos valores cuya realización se evalúa imprescindible para el logro de un orden social justo. De esta forma, las exigencias de la seguridad del Derecho permiten crear algunos de los presupuestos de la libertad. Un orden jurídico estructurado con arreglo a esos requerimientos introduce en el ambiente de las relaciones públicas y privadas unos parámetros ciertos, fijos y previsibles, que posibilitan un ejercicio confiado de la iniciativa y libertad personales.

Dentro de este marco, Rawls ha declarado que un orden jurídico que cumpla del modo más perfecto los preceptos del *Rule of Law* asegura una base más firme para la libertad. Cuanto más públicas, claras, irretroactivas..., sean las leyes, más protegida estará la libertad de los individuos. La razón de esa creencia es que las normas jurídicas constituyen pilares mediante los que las personas confían unas en otras y ejercen sus derechos cuando sus expectativas no se cumplen. Si los cimientos de estas expectativas son inseguros, también lo son los límites de la libertad humana. Sus peligros son menores cuando la ley es administrada imparcial y regularmente y se sabe qué cosas castiga y qué cosas entran o no dentro de su poder de actuación, ya que los ciudadanos pueden entonces proyectar sus planes conjuntamente.

228. ELEMENTOS Y SIGNIFICADOS DE LA SEGURIDAD JURÍDICA QUE FUNDAMENTAN LA PREDECIBILIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES

Estos elementos son:

- La certeza jurídica
- La eficacia jurídica
- La ausencia de arbitrariedad.

Ellos representan los términos más simples del lenguaje de la seguridad, de tal manera que todos los principios que suelen aparecer vinculados ya sea publicidad, claridad,

irretroactividad, etc., pueden contemplarse como instrumentos de certeza y/o eficacia, y/o interdicción de la arbitrariedad.

Como desarrollo de los elementos precedentes, un primer conjunto de significados de la seguridad del Derecho puede ser englobado bajo el término *certeza jurídica*. Aunque entre ellos hay una gran proximidad y, fácticamente, se superponen de manera parcial, es conveniente distinguir cuatro manifestaciones: la certeza de orientación, la certeza de existencia, la predecibilidad jurídica y la firmeza del Derecho. En relación a la certeza de orientación y a la certeza de existencia, la seguridad del Derecho es, en primer lugar, certeza o certidumbre jurídica.

Para Geiger, sería la circunstancia de que se conozca lo que está en el Ordenamiento, el saber acerca de las normas jurídicas o la cognoscibilidad de su contenido libre de dudas, lo cual permite a los ciudadanos conocer lo que está prohibido, impuesto o permitido, y poseer un conocimiento nítido de cuándo y cómo intervendrá el Estado en sus vidas. Esta certeza representa una necesidad de todo individuo que se rige en sus actos de conformidad con esas normas, una defensa frente a la arbitrariedad, un medio para evitar los conflictos jurídicos, así como una exigencia intrínseca del funcionamiento correcto de todo sistema. Sin embargo, no hay duda de que la certeza del Derecho ha sido y sigue siendo valorada por la seguridad de orientación que dispensa a los sujetos de Derecho a la hora de actuar, de proyectar y decidir poner en marcha un curso de acción.

La anterior es una certeza que emana del conocimiento del contenido de las normas jurídicas que podría llamarse certeza de orientación y que debe ser distinguida de la certeza de existencia. Aspecto que depende de la conciencia de su existencia y vigencia, no de un acceso a los contenidos de la regulación jurídica. Son, por consiguiente, dos aspectos separables, si bien la certeza de

orientación no es posible sin una previa certeza de existencia de la norma, no implicando la última, necesariamente, el conocimiento del contenido. Mientras que la primera depende de las cualidades del lenguaje jurídico que hacen comprensible el significado de la precisión, claridad, publicidad, etc.; la segunda demanda la concurrencia de todos los indicios que permiten estimar que una norma posee existencia jurídica (publicación, ausencia de antinomias, jerarquía de fuentes...).

Por otro lado, en la certeza de contenido y de existencia descansa lo que clásicamente ha sido y continúa siendo un concepto restringido de seguridad jurídica, propiamente el de la predictibilidad del Derecho. La certeza de conocimiento permite a los ciudadanos conocer, con claridad y de antemano, lo que está prohibido y permitido y, en función de ese conocimiento, organizar su conducta presente y programar expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de predecibilidad. Al hacer esta aportación, el Derecho crea seguridad y confianza en la vida de cualquier organización social.

Concluyentemente, la certeza jurídica incluiría la firmeza del Derecho vigente. Además del contenido de las normas, integra la ausencia de dudas acerca de la plena vigencia de ciertas decisiones, las cuales no pueden ser muchas veces sólo expresión de la razón, sino también una decisión, en principio definitiva o con pretensión de serlo, de aspiraciones o conflictos.

Desde este punto de vista, Coing postula que la seguridad jurídica supone que los derechos, las posiciones de poder y de posesión, una vez fundadas, tienen que subsistir sin que nadie las discuta o perturbe, y que las decisiones jurídicas, una vez formuladas, deben ser mantenidas. Ello posibilita que se pueda confiar en el Derecho como una magnitud fija, sustraída a toda transformación caprichosa, en función de la que el hombre puede ordenar su vida y ponerla bajo su protección.

Pero la seguridad jurídica no reclama solamente certeza de existencia y de cognoscibilidad, sino que requiere que el Derecho tenga una eficacia regular. Aparte de hacer factible la certeza de existencia, la eficacia es en sí una reivindicación de la seguridad jurídica que, de no ser satisfecha, dejaría sin sentido a la certeza, lo cual resultaría poco satisfactorio e insuficiente si lo que el Estado establece como Derecho soliera incumplirse. De ahí que un Derecho desobedecido no genere certidumbre de orden, ni suministre a los ciudadanos un dato desde el que poder prever la conducta de los poderes normativos ni la de los demás individuos. Una norma jurídica desatendida no crea en su ámbito de regulación seguridad del Derecho, sino del no-Derecho.

Si la certeza normativa hace posible la predictibilidad jurídica y la certeza de la acción, la eficacia es necesaria para que haya confianza. Para Geiger, la certeza del Ordenamiento se refiere a qué es la norma; la confianza en el ordenamiento, en cambio, hace referencia a qué fuerza tiene. La confianza de los ciudadanos en el Derecho compele a que su eficacia no quede paralizada por hechos como la *ignorantia iuris*, la presencia de lagunas normativas o las dudas sobre la constitucionalidad de algún precepto. O sea, la seguridad jurídica, como principio de Derecho objetivo, impone a los operadores del sistema jurídico la máxima eficacia posible de sus disposiciones. En la medida en que las normas se convierten muchas veces en los criterios de interacción y orientación seguidos por los ciudadanos, sólo podrán seguir desempeñando dicha función social si gozan de la máxima fuerza práctica.

Por otro lado, la seguridad del Derecho exige que los poderes públicos realicen actos de producción y aplicación de las normas de una manera no arbitraria.

La seguridad jurídica asevera Henkel - se opone a la incertidumbre, al azar, a la arbitrariedad y al desamparo frente a una situación de regulación. Diferentemente, donde reina la arbitrariedad, el poder

representa una fuente permanente de inseguridad, convirtiendo al ciudadano en «un subdito incapaz de organizar su vida, pendiente siempre de escrutar el rostro de sus gobernantes para averiguar sus buenos o malos humores y poder decidir en consecuencia».

Según acabamos de ver, la certeza y la eficacia del Derecho se refieren a diferentes aspectos de la estructura formal, la duración y la existencia empírica de las normas; no obstante, la seguridad jurídica no descansa exclusivamente, ni siquiera ocasionalmente, en tales factores. También lo hace, quizá progresivamente, en la forma de los actos por los cuales son creadas o aplicadas esas normas. Podría admitirse que, mientras que la certeza y la eficacia son la seguridad jurídica de la norma, la ausencia de arbitrariedad es la del acto (de producción, interpretación o aplicación). La seguridad jurídica no se agota en la certeza y en la eficacia, sino que, como recalcará el Tribunal Constitucional español desde sus primeras sentencias, «es una suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, [...]». Más aún, para Gianformaggio y Habermas, la interdicción de la arbitrariedad no es sólo uno de los significados esenciales de la seguridad jurídica, mostrándose como la única demanda capaz de dotarla de un contenido razonablemente realizable en la actualidad.

El legislador, para asegurar los intereses de los ciudadanos y orientar su acción, procede con rapidez; pero, justamente al hacerlo de ese modo, acaba legislando de manera equivocada, por lo que habrá que dictar nuevas normas para rectificar las anteriores. Así, si el legislador actúa rápido, actúa mal y tiene que corregir sus actos, lo que provoca inseguridad; si tarda, no asegura los derechos que los ciudadanos reclaman, ni los orienta, con lo que crea un estado de inseguridad.

229. LA INCIDENCIA DE LOS PRECEDENTES EN LA PREDECIBILIDAD DE LAS DECISIONES JUDICIALES

La incidencia de los precedentes en la predictibilidad de las decisiones judiciales se debe ligar principalmente al principio de igualdad, habiéndose de tener en cuenta que casos iguales tengan un tratamiento similar. Su justificación por la vía de la igualdad incide en la racionalidad de la argumentación, pero el principio no significa reiterar la jurisprudencia porque no valoraríamos el contenido y seguir los precedentes no es sólo reiteración, sino apartamiento motivado. La aclaración recae en que lo esencial es el seguimiento justificado, la jurisprudencia se ha de valorar tanto para ser seguida como para separarse de ella cambiando el fundamento de su relevancia, puesto que ha pasado de pensarse como atribución de valor relevante a la obligación de motivar la decisión (motivar el seguimiento y, aún más, el cambio). De esta manera, la explicación se desenvuelve en cuanto la actividad judicial es una actividad práctica de argumentación racional, expresiva de un compromiso entre la predecibilidad de las decisiones y la justicia vinculada a aspectos morales o práctico-generales.

Jurídicamente, cabe asumir que un enunciado judicial general que sirve de justificación a una decisión deberá utilizarse en todas las posteriores que consistan en casos idénticos. Además, llegados a este punto, surge la duda de si podemos sostener que existan dos casos idénticos, y si, en la hipótesis negativa, podríamos concluir que los fallos de esos dos supuestos han de ser diferentes. Más, bajo estas circunstancias, lo que se suele argüir es que, a pesar de que sólo

haya relación y no plena identidad porque haya cambiado la realidad, lo normal es que esas modificaciones no se hagan relevantes a tales efectos.

Así pues, la aplicación de los precedentes no significa seguir reglas previas. En el primer supuesto, me refiero a la forma de apreciar razones para *crear* reglas, de lo que se infiere que es exigible considerar una razón para otorgar una solución al caso que se presenta como similar al anterior. De gran trascendencia es aquí la analogía para dar solución a supuestos no valorados por el Ordenamiento jurídico, construyendo reglas, y para interpretar las reglas legales vigentes. Simplificadamente, la analogía sirve a estos efectos porque se funda en el desarrollo del principio cuyo contenido dicta la tesis aristotélica de que "lo igual debe ser tratado igualmente y lo desigual debe considerarse desigualmente". Sin embargo, el argumento analógico requiere de un proceso aplicativo de gran complejidad que hace que se reputen como una inferencia, o como una heurística para encontrar nuevas premisas, comprendiéndose desde la perspectiva de un procedimiento que reviste el intento de conseguir "un equilibrio reflexivo entre la regla generalizada y los juicios particulares de la analogía".

Sobre este aspecto, la solución radica en sustentar que el precedente materializa el principio de igualdad porque hace necesario que se dé un tratamiento normativo igual a los supuestos que reúnen condiciones fácticas semejantes. La generalidad de las normas jurídicas y el mandato de aplicación uniforme van dirigidos a la realización de la seguridad y certeza jurídicas, más que a la realización del valor de la igualdad. Para sustentar esta idea me apoyo en el rechazo continuo al precedente como enunciado judicial general. En esta dirección, no se pueden alterar sus criterios interpretativos, lo que conduciría a una petrificación de la experiencia jurídica y a cerrar

toda posible evolución en la interpretación del Ordenamiento. En resumen, nos hemos de preguntar si con el principio de igualdad en la aplicación de la ley se introduce algo parecido al autoprecedente flexible.

Otra cuestión que creo de utilidad es que el precedente puede tener una fuerza obligatoria jurídica, con una sanción, si es que no se aplica, o de hecho, o sea, que, de no aplicarse, haya un alto grado de posibilidades de que, recurrido el caso, el tribunal al que corresponda su resolución dictamine una solución distinta. A lo que hay que agregar que, cuando nos hallemos ante dos casos idénticos, no surge ningún problema puesto que nace la cosa juzgada, pero, si los supuestos son similares, se deben resolver de forma igual, limitándose la comparación a las diferencias en la interpretación y aplicación de las normas sin que sea extensible a la apreciación de los hechos.

No obstante, salta la duda de qué labor desempeña la acción de los Tribunales Constitucionales. Pues bien, aun estando dentro de sus competencias el fiscalizar las resoluciones judiciales que presuntamente infringen los derechos fundamentales, percibimos que, conforme al principio de igualdad, no es posible controlar los márgenes de discrecionalidad que tienen los jueces al ejercer su función por no violar ningún derecho fundamental. Lo expresado se debe a que la exclusividad de la jurisdicción supone tener que respetar la creatividad de la igualdad en la aplicación de la ley. Limita su control en el aseguramiento de las disposiciones constitucionales y deja que sea el poder judicial el que efectúe una depuración de las opciones de creación. Por lo que, sabido que el criterio de oportunidad es constitucional, los jueces y tribunales pueden seleccionar los criterios admitidos constitucionalmente que, a su juicio, son más pertinentes y

que actúan en el ámbito de la creatividad de cada una de las sentencias que dictan.

Desde esta perspectiva, la cuestión se centra en que, una vez que se ha determinado la corrección constitucional del criterio seleccionado, todos los enjuiciamientos que intenten delimitar un criterio deseable de entre los que son jurídicamente posibles y estén

potencialmente en la norma se han de comprender como una injerencia en el desarrollo de la función jurisdiccional. Por otro lado, en virtud del principio de la independencia judicial, se restringe el abanico de los criterios decisorios que eventualmente son vinculadores, cosa que tiene su raíz en que el juez ha de entender que los criterios concretizantes seguidos por otros órganos jurisdiccionales son directrices orientadoras a seguir, pero no vinculan. Por ende, la respuesta se encontraría en que el único modo de reducir la variedad y complejidad de los criterios decisorios es atribuir esa clase de valor a los criterios interpretativos de las normas que se ha adoptado en cada supuesto por cada órgano jurisdiccional en particular y en cuanto a las relaciones futuras que tiene, manteniéndose que el ejercicio del control ha de realizarse por la jurisdicción ordinaria por medio de los recursos. Si bien, en lo que se refiere al ámbito normativo que es de determinación jurisdiccional obligada, queda rechazado todo enjuiciamiento por la jurisdicción, pues, en caso positivo, se produciría una violación del principio de independencia judicial. De ahí que la competencia de los Tribunales Constitucionales en la materia se explique porque se da al precedente un valor vinculador: es un parámetro que trasluce el principio de igualdad en las resoluciones judiciales.

Matizando más, se suele postular que la relevancia constitucional del precedente descansa en ser un instrumento que sirve para apreciar la juridicidad de los pronunciamientos judiciales. Sin embargo, se muestra que este factor instrumental corresponde a la motivación de las sentencias, pues al traducirse el principio de igualdad en el requerimiento de justificar toda diferencia de trato, la verificación de su observancia en las resoluciones jurisdiccionales sólo se puede hacer si se examina esa motivación. Consecuentemente, lo elemental para corroborar que ha habido una vulneración del principio de igualdad es que la fundamentación de la sentencia sea defectuosa. Los precedentes aportan una mayor fuerza fundamentadora puesto que conllevan unos criterios de

interpretación que han de estimarse por el juzgador para asegurar la reflexividad de sus nuevos criterios discrepantes. Con este enfoque, se observa que, ya que siempre se precisa que haya una fundamentación adecuada, se permite, a veces, la remisión a fundamentaciones anteriores, y que, cuando se produce un cambio de las sentencias en relación con el precedente, la demanda se circunscribe a una motivación suficientemente razonable.

Deduciblemente, se ha de producir una fundamentación razonable y suficiente del cambio de interpretación de las normas, siendo la pregunta que procede ¿respecto de qué se ha de requerir la razonabilidad de los órganos judiciales?, y la respuesta es que la medida de su afirmación o negación descansa en qué se ha de hacer respecto de la norma aplicable al caso.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

- **PRINCIPIOS DEL DERECHO.-** los principios generales del Derecho tienen carácter ideal y absoluto y por lo tanto, son superiores al orden positivo, porque tienen valor dentro de las normas, puesto que representan la razón suprema. Asimismo, son una forma de método de integración jurídica reconocida por la Teoría del Derecho.
- **JUZGADO PENAL.-** Es la institución existente de La corte superior de primera instancia que sirve para resolver los conflictos y faltas de la sociedad.
- **SENTENCIA PENAL.-** es la deducción de la argumentación racional de los operadores jurídicos, quienes determinan primeramente los hechos relevantes, y después las normas dentro de las cuales sea posible enmarcar esos hechos hasta llegar lógicamente al fallo.
- **FUNDAMENTACIÓN DOCTRINARIA DE LAS SENTENCIAS PENALES** cumple la importante función de legitimar la administración de justicia frente a los distintos foros de la sociedad (principalmente los Tribunales Superiores).

2.4. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

24.1. HIPÓTESIS GENERAL:

Los principios del derecho penal influye significativamente en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015-2017.

24.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICOS:

HE₁ Los principios del derecho penal influyen significativamente en la seguridad jurídica en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017

HE₂ Los principios del derecho penal influyen significativamente en la motivación de las sentencias en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017

HE₃ Los principios del derecho penal influyen significativamente en los criterios normativos del juzgador en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017

2.5. SISTEMA DE VARIABLES

2.5.1 Variable independiente:

Principios del derecho penal

2.5.2 Variable Dependiente:

Decisiones judiciales

2.6 Operacionalización de variables

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
Variable Independiente: PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL	- Principio de Legalidad	- Garantía criminal - Garantía jurisdiccional
	- Principio de Igualdad	- Trato justo - Proceso justo
	- Principio de Proporcionalidad de la Pena	- Idoneidad - Necesidad
Variable Dependiente: DECISIONES JUDICIALES	- Seguridad jurídica	- Eficacia jurídica - Ausencia de arbitrariedad
	- Motivación de sentencias	- Derecho justiciable del - Ordenamiento racional
	- Criterios Normativos	- Imparcialidad - Anticipa

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Tipo de investigación. Aplicada

Para Murillo (2008), la investigación aplicada recibe el nombre de “investigación prácticao empírica”, que se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.

3.1.1. Enfoque

La presente investigación es de un enfoque cuantitativo y cualitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamientos en una población investigación.

3.1.2. Nivel De Investigación:

La presente investigación se enmarca dentro del nivel de investigación DESCRIPTIVA – CORRELACIONAL porque nos centraremos en un grupo determinado que será analizado sobre las 2 variables que utilizaremos según Hernández Sampieri.

3.1.3. Diseño De Investigación

No experimental porque obtendremos la información tal y como se da de manera natural observando las situaciones ya existentes donde no se podrá manipular las variables. Según Sampieri (1991, 109) la “no experimental es aquella que se efectúa sin la manipulación intencionada de variables, lo que aquí se realiza es la observación de fenómenos en su ambiente natural”

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Población.

El estudio de investigación será 25 Magistrados y 381 Abogados de Cerro de Pasco, 2014 – 2016.

3.2.2. Muestra.

Para Hurtado (1998), consiste: “en las poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la validez de los resultados”. (p.77). El tamaño de la muestra es calculada con la fórmula estadística para muestra finita con un coeficiente de confianza al 95%, y con un error estimado del 5%. Para ello se utilizará la siguiente fórmula:

$$n = \frac{Z^2 pqN}{(N - 1)E^2 + Z^2 pq}$$

Dónde:

n= El tamaño de la muestra que se calculó

N= Población

Z= Nivel de confianza 95% - 1.96

E= Error estimado que voy a admitir (5%)

p= Probabilidad de ocurrencia o éxito (0.5)

q= Probabilidad de no ocurrencia o fracaso (0.5)

- La muestra será de **198 individuos** entre magistrados y abogados de Cerro de Pasco.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.3.1. Encuesta.

Dirigida a la muestra seleccionada, observando criterios metodológicos para determinar sus términos, para lo cual, y en forma previa se elaborara el cuestionario de preguntas.

3.3.2. Guías de entrevista.

En la presente investigación se aplicara cuestionarios a los señalados en la muestra en el Distrito Judicial de Pasco, seleccionados de la población, entrevistándolos en forma verbal, previa a realizar los cuestionarios de preguntas, teniendo en cuenta las variables de estudio.

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.4.1. Cuestionario.

En la presente investigación se utilizara como instrumento el cuestionario que consistirá en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo.

3.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.

Los resultados se presentarán en tablas y gráficos, analizados con la aplicación de la estadística descriptiva, seguidamente se procederán a analizarlos e interpretarlos.

Para el procesamiento de los datos se utilizaran las herramientas informáticas como: Excel, Word, otros, presentándose los resultados en cuadros de doble entrada y gráficos respectivamente, teniendo en cuenta las variables de la investigación.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1 Procesamiento de datos:

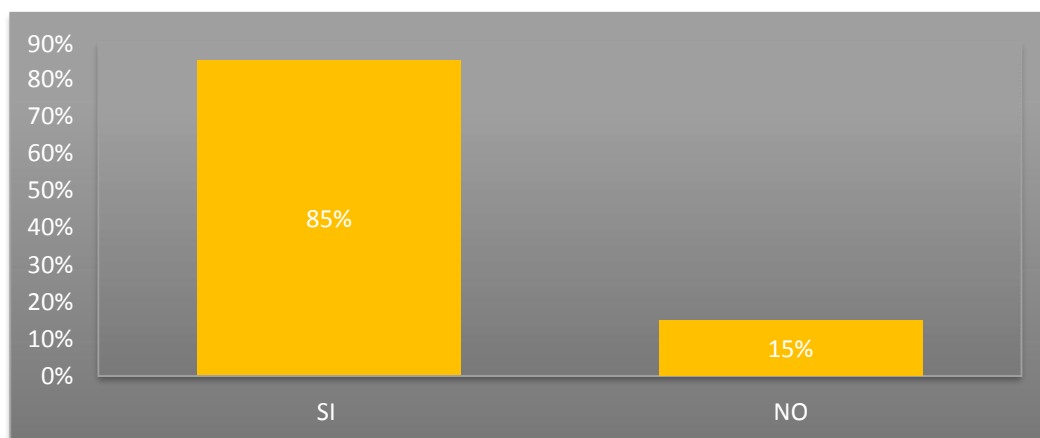
Se aplicó la encuesta a 198 individuos entre magistrados y abogados de Cerro de Pasco. El cual se presenta a continuación en frecuencias (f_i), las estadísticas descriptivas y con la asignación de sus respectivas gráficas.

TABLA N°01

¿Según su opinión considera usted que se aplica garantía criminal en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	168	85,0	85,0	85,0
	NO	30	15,0	15,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°01



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

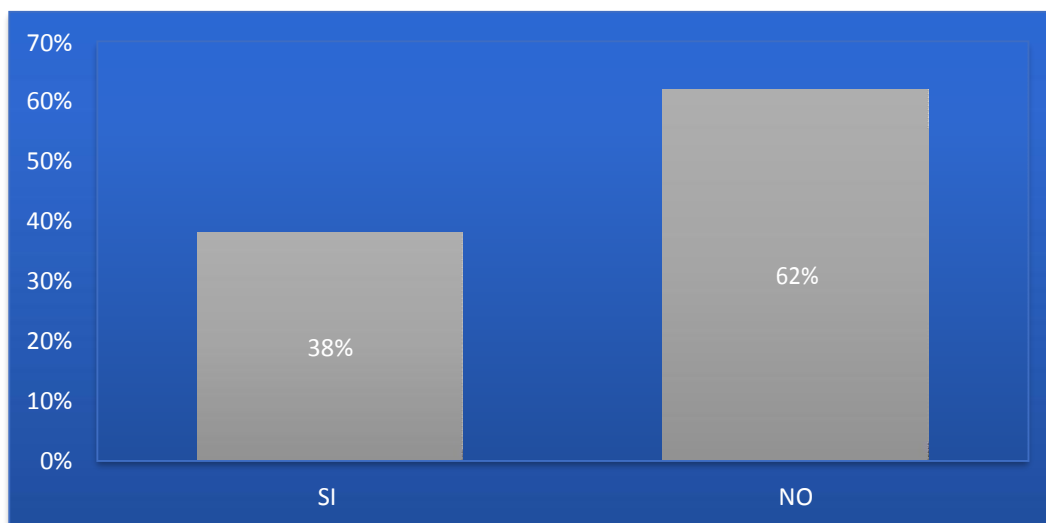
En la imagen N° 01 se puede ver que el 85% de encuestados opina que si se aplica garantía criminal en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco y el 15% opina que no se aplica, como se puede apreciar la mayoría de encuestados considera que se aplica garantía criminal en el mencionado Juzgado de Cerro de Pasco.

TABLA N°02

¿Según su opinión cree usted que existe garantía jurisdiccional en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	75	38,0	38,0	38,0
	NO	123	62,0	62,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°02



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

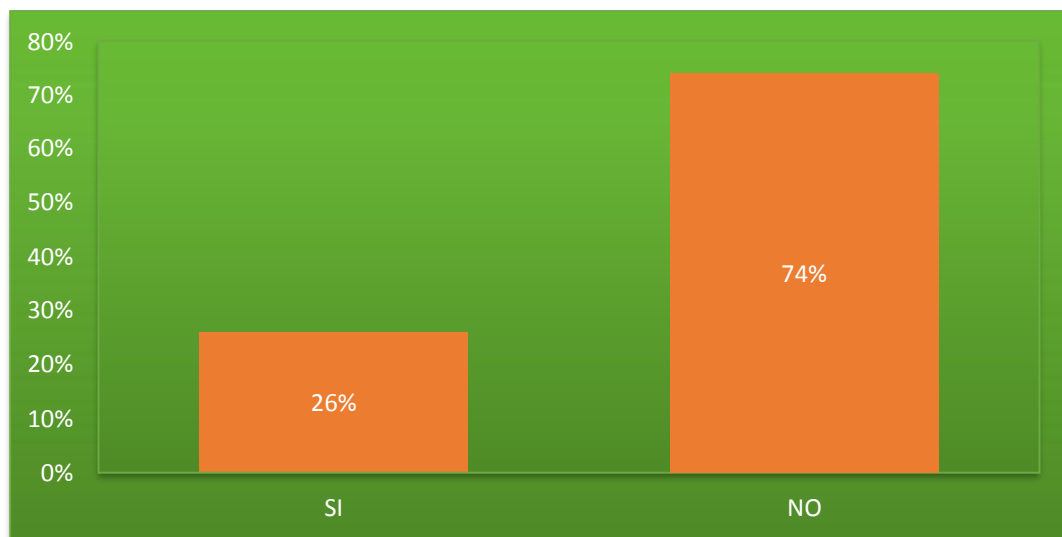
En la imagen N° 02 se puede ver que el 62% de encuestados opina que no existe garantía jurisdiccional en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco y el 38% opina que si existe garantía jurisdiccional en dicho Juzgado, lo que quiere decir que en el mencionado Juzgado no existe la debida garantía jurisdiccional.

TABLA N°03

¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco existe un trato justo?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	51	26,0	26,0	26,0
	NO	147	74,0	74,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°03



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

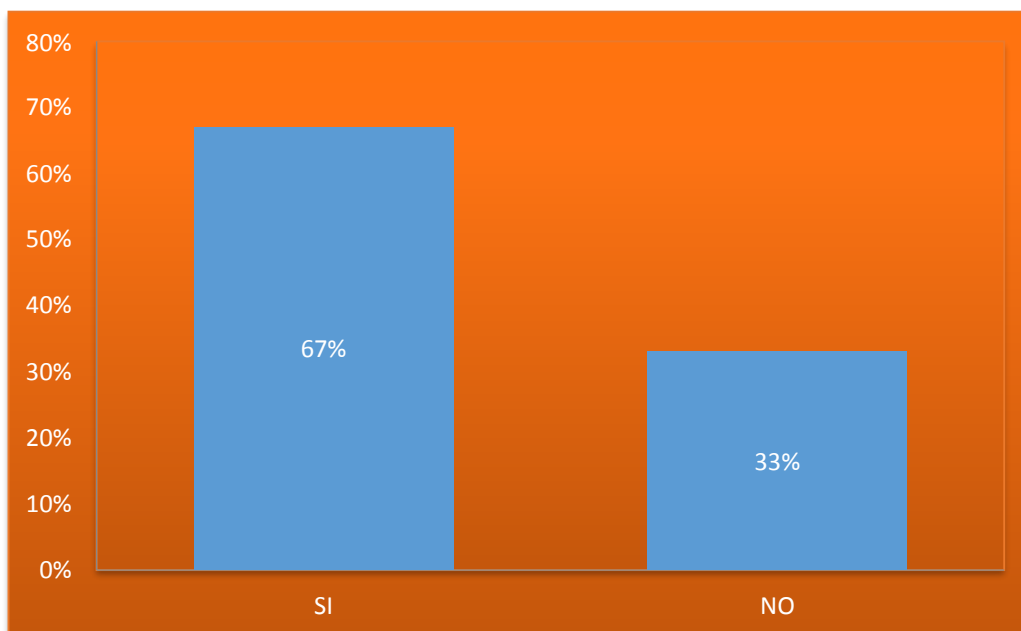
En la imagen N° 03 se puede ver que el 74% de encuestados opina que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco no existe un trato justo y el 26% opina que si existe un trato justo, lo que quiere decir que conforme las encuestas realizadas en el Juzgado antes mencionado no se da un trato justo al justiciable.

TABLA N°04

¿Según su opinión considera usted que se da un proceso justo en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	133	67,0	67,0	67,0
	NO	65	33,0	33,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°04



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

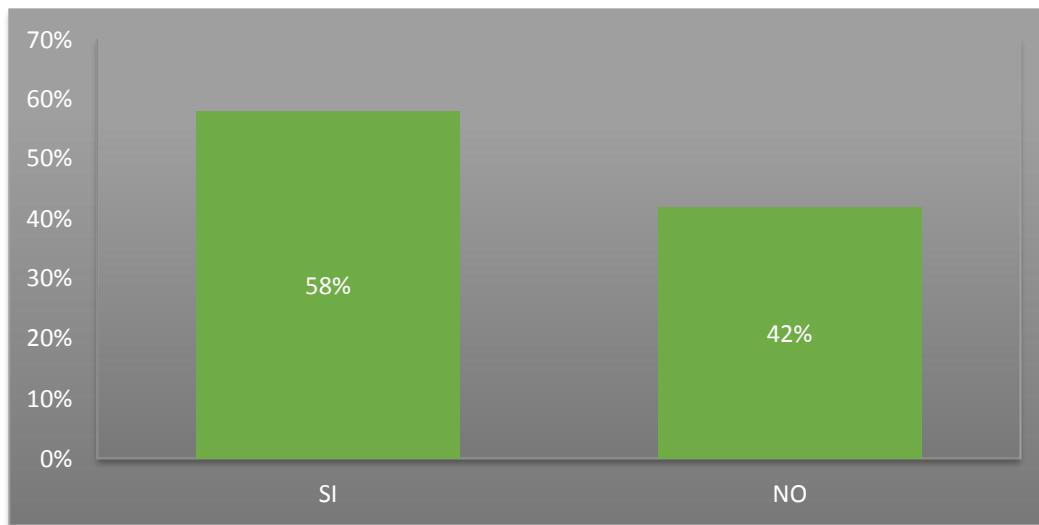
En la imagen N° 04 se puede ver que el 67% de encuestados opina que si se da un proceso justo en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco y el 33% opina que no se da un proceso justo en el mencionado Juzgado, se puede decir que el proceso justo tendría que darse a un 100%, sin embargo existe un porcentaje que opina que no se da un proceso justo en dicho Juzgado de Pasco.

TABLA N°05

¿En el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco al imponer una pena se toma en cuenta el principio de idoneidad?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	115	58,0	58,0	58,0
	NO	83	42,0	42,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°05



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

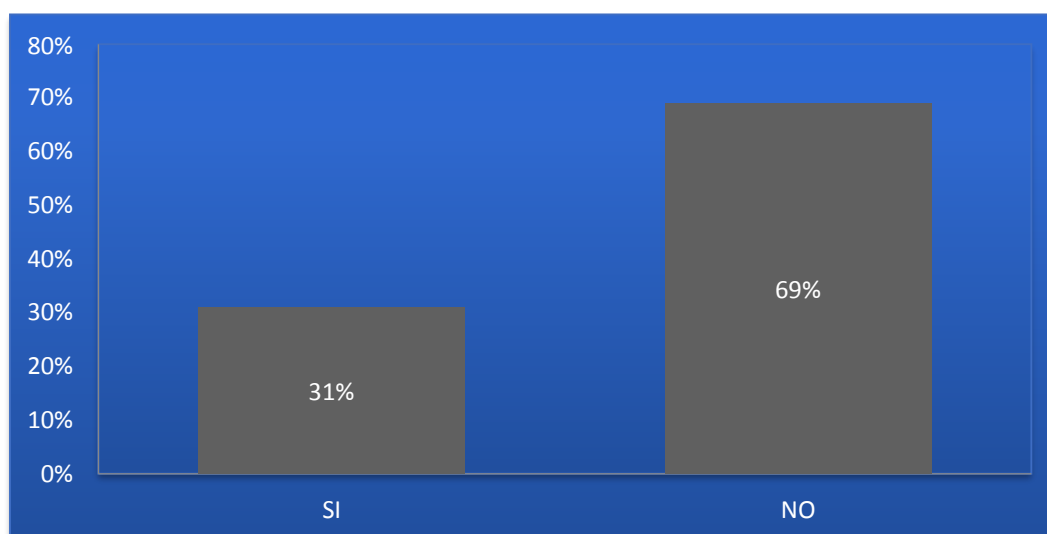
En la imagen N° 05 el 58% de encuestados opina que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco al imponer una pena si se toma en cuenta el principio de idoneidad, mientras que el 42% opina que no se toma en cuenta dicho principio, al respecto se puede apreciar que las opiniones se encuentran casi divididas siendo que en todos los Juzgados se debe tomar en cuenta siempre dicho principio.

TABLA N°06

¿En el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se aplica el principio de necesidad cuando se encuentra ausente otros medios alternativos para el logro del objetivo constitucional legítimo?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	61	31,0	31,0	31,0
	NO	137	69,0	69,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°06



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

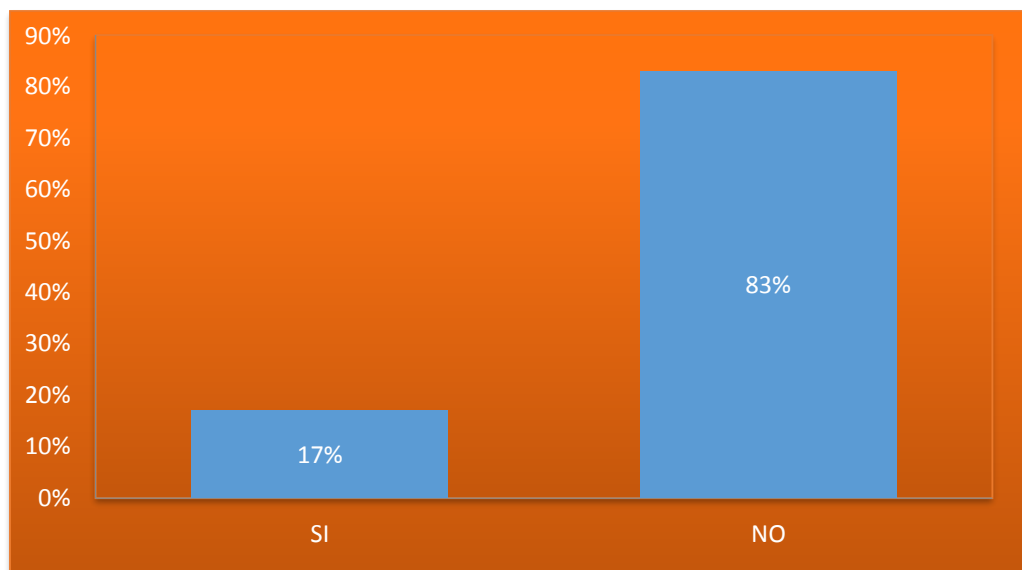
En la imagen N° 06 el 69% de encuestados opina que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco no se aplica el principio de necesidad cuando se encuentra ausente otros medios alternativos para el logro del objetivo constitucional legítimo y el 31% opina que si se aplica dicho principio, lo que significa que en dicho Juzgado no siempre se llega al logro del objetivo constitucional.

TABLA N°07

¿Según su opinión cree usted que existe eficacia en las normas jurídicas?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	34	17,0	17,0	17,0
	NO	164	83,0	83,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°07



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

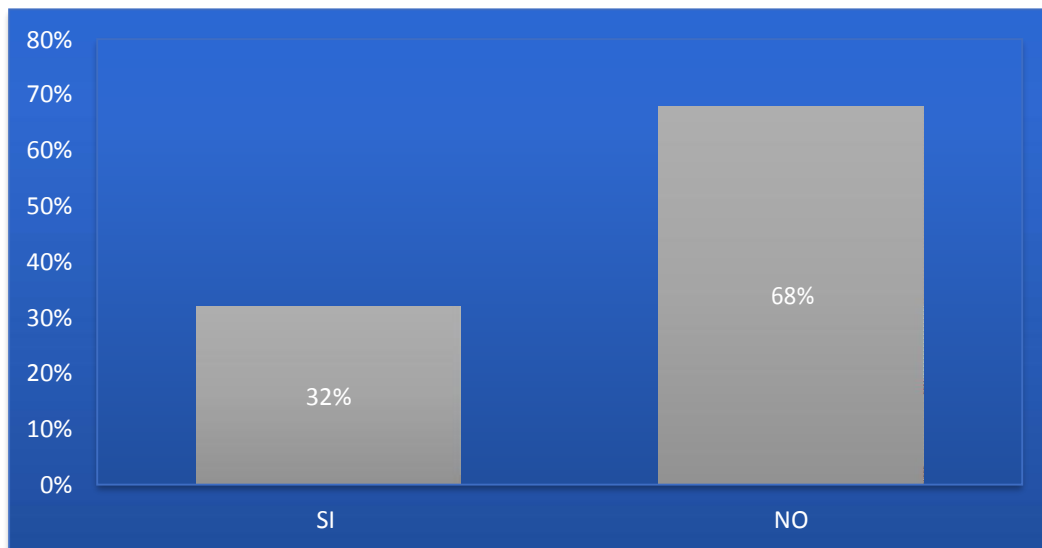
En la imagen N° 07 el 83% de encuestados opina que no existe eficacia en las normas y el 17% de encuestados opina que si existe eficacia en las normas jurídicas, lo que quiere decir que no por el hecho de ser más duras estas, el resultado será mejor.

TABLA N°08

¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se resuelve un conflicto en el tiempo oportuno?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	63	32,0	32,0	32,0
	NO	135	68,0	68,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°08



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

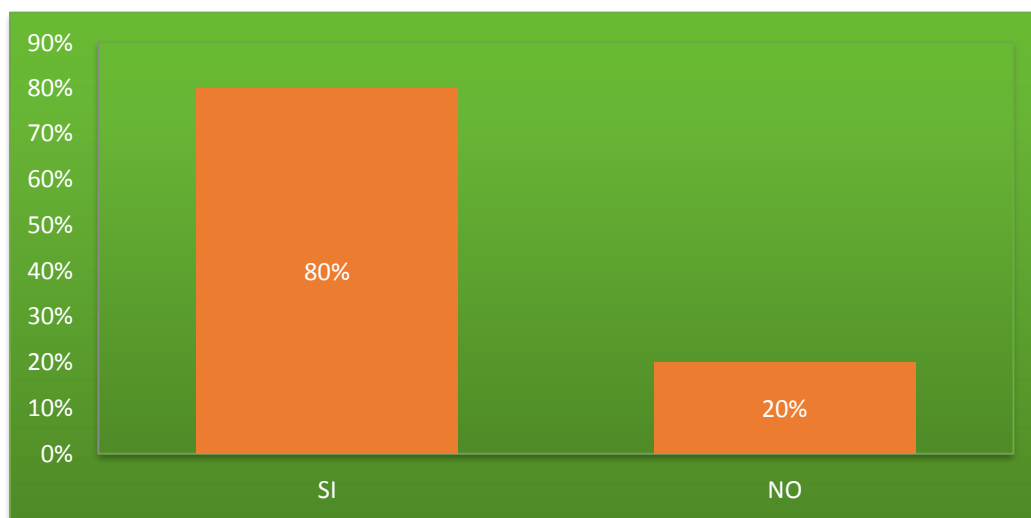
En la imagen N° 08 el 68% de encuestados opina que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se resuelve un conflicto en el tiempo oportuno y el 32% de encuestados opina que no se resuelve un conflicto en el tiempo oportuno, lo que quiere decir que la mayoría de encuestados opina que hay solución de un conflicto en el tiempo oportuno, sin dilaciones.

TABLA N°09

¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se emite decisiones apoyándose en el derecho del justiciable?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	158	80,0	80,0	80,0
	NO	40	20,0	20,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°09



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

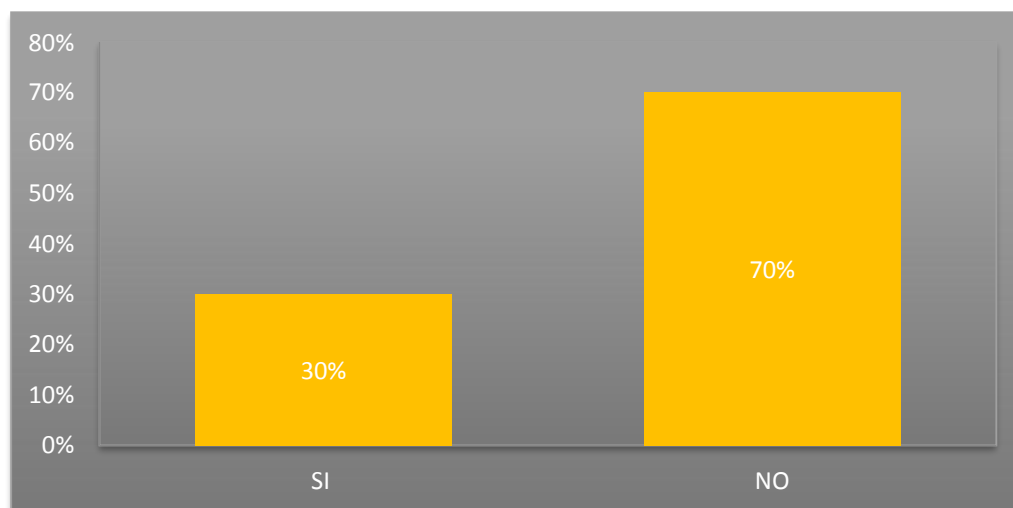
En la imagen N° 09 el 80% de encuestados opina que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco si se emite decisiones apoyándose en el derecho del justiciable y el 20% de encuestados opina que no se emite decisiones apoyándose en el derecho del justiciable, lo que quiere decir que en su gran mayoría los encuestados opinan que se respeta el derecho del justiciable.

TABLA N°10

¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se da un adecuado razonamiento al momento de exponer las razones que motivaron la resolución?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	59	30,0	30,0	30,0
	NO	139	70,0	70,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°10



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

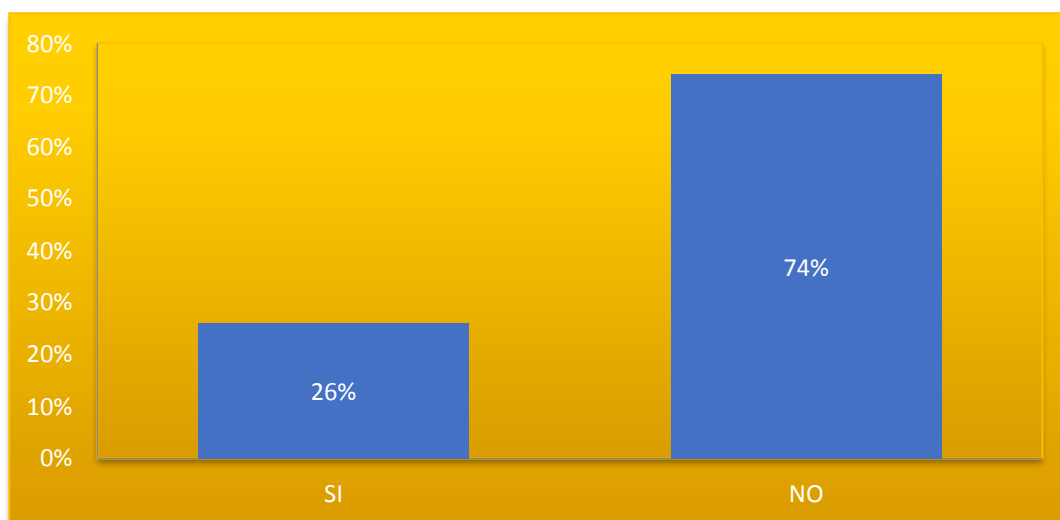
En la imagen N° 10 el 70% de encuestados opina que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco no se da un adecuado razonamiento al momento de exponer las razones que motivaron la resolución y el 30% de encuestados opina que si se da un adecuado razonamiento al momento de exponer las razones que motivaron la resolución, lo que quiere decir que la mayoría de encuestados opina que al motivarse una resolución no existe un razonamiento adecuado.

TABLA N°11

¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco existe imparcialidad al momento de emitir sus decisiones judiciales?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	51	26,0	26,0	26,0
	NO	147	74,0	74,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°11



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

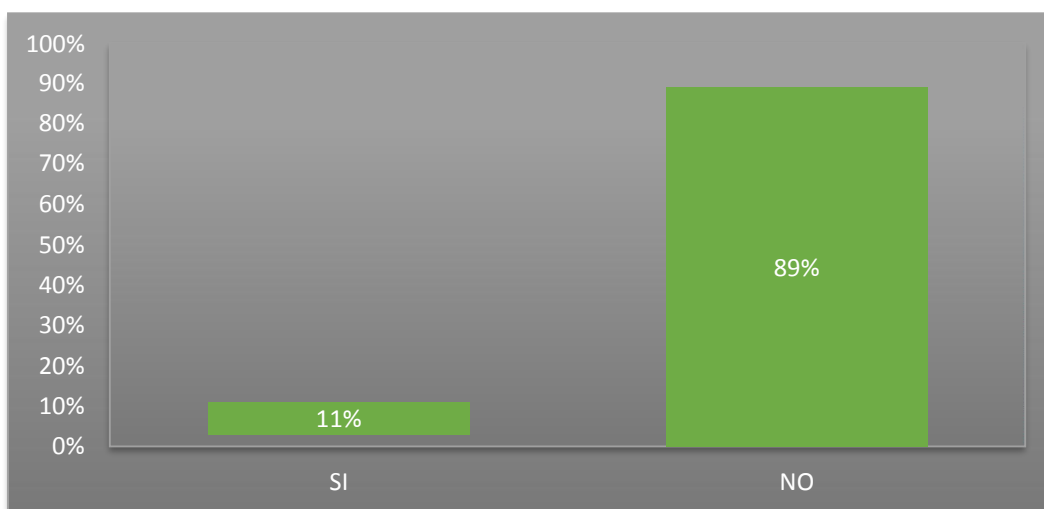
En la imagen N° 11 el 74% de encuestados opina en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco no existe imparcialidad al momento de emitir sus decisiones judiciales y el 26% de encuestados opina que si existe imparcialidad, lo que quiere decir que la mayoría de encuestados opina que se parcializan por una de las partes y ello no debe existir.

TABLA N°12

¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se anticipan a los hechos al momento de decidir?

		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	SI	22	11,0	11,0	11,0
	NO	176	89,0	89,0	100,0
	Total	198	100,0	100,0	

IMAGEN N°12



INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS:

En la imagen N° 12 el 89% de encuestados opina que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco no se anticipan a los hechos al momento de decidir y el 11% de encuestados opina que si se anticipan a los hechos al momento de decidir, lo que quiere decir que la mayoría de encuestados opina que al momento de decidir no se anticipan a los hechos y lo realizan sin un mejor estudio.

4.2 La Prueba de hipótesis

Se plantearon las hipótesis de investigación y las hipótesis nulas tanto para la general y las específicas, luego se determinó el coeficiente de correlación de Pearson (r) empleando el software SPSS (versión 22.0), en el que se ingresó los datos de las variables. Del mismo modo para la interpretación se utilizó la siguiente tabla:

INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE KARL PEARSON

VALOR O GRADO “r”	INTERPRETACIÓN
± 1.00	Correlación perfecta (positiva o negativa)
De ± 0.90 a ± 0.99	Correlación muy alta (positiva o negativa)
De ± 0.70 a ± 0.89	Correlación alta (positiva o negativa)
De ± 0.40 a ± 0.69	Correlación moderada (positiva o negativa)
De ± 0.20 a ± 0.39	Correlación baja (positiva o negativa)
De ± 0.01 a ± 0.19	Correlación muy baja (positiva o negativa)

Contrastación de la hipótesis general – TABLA N°13

Hi: Los principios del derecho penal influye significativamente en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2014-2016.

Ho: Los principios del derecho penal no influye significativamente en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2014-2016.

Correlaciones

		DECISIONES JUDICIALES	PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
DECISIONES JUDICIALES	Correlación de Pearson	1	,451**
	Sig. (bilateral)		,010
	N	198	198
PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL	Correlación de Pearson	,451**	1
	Sig. (bilateral)	,010	
	N	198	198

** . La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Interpretación: Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.451 se encuentra dentro de una valoración moderada positiva del mismo modo el significado bilateral (0,010) es menor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, Los principios del derecho penal influye significativamente en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2014-2016.

Contrastación de las hipótesis específicas:

Hipótesis específica 1 – TABLA N°14

Hi: Los principios del derecho penal influyen significativamente en la seguridad jurídica en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017

Ho: Los principios del derecho penal no influyen significativamente en la seguridad jurídica en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017.

Interpretación: Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.417 se

Correlaciones

		SEGURIDAD JURÍDICA	PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
SEGURIDAD JURÍDICA	Correlación de Pearson	1	,417**
	Sig. (bilateral)		,002
	N	198	198
PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL	Correlación de Pearson	,417**	1
	Sig. (bilateral)	,002	
	N	198	198

** . La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

encuentra dentro de una valoración moderada positiva del mismo modo el significado bilateral (0,002) es menor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, Los principios del derecho penal influyen significativamente en la seguridad jurídica en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017

Hipótesis específica 2 – TABLA N°15

Hi: Los principios del derecho penal influyen significativamente en la motivación de las sentencias en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017

Ho: Los principios del derecho penal no influyen significativamente en la motivación de las sentencias en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017

Correlaciones

		MOTIVACIÓN DE SENTENCIA	PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
MOTIVACIÓN DE SENTENCIA	Correlación de Pearson	1	,588**
	Sig. (bilateral)		,029
	N	198	198
PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL	Correlación de Pearson	,588**	1
	Sig. (bilateral)	,029	
	N	198	198

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Interpretación: Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.588 se encuentra dentro de una valoración moderada positiva del mismo modo el significado bilateral (0,029) es menor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, Los principios del derecho penal influyen significativamente en la motivación de las sentencias en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017.

Hipótesis específica 3 – TABLA N°16

Hi: Los principios del derecho penal influyen significativamente en los criterios normativos del juzgador en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017

Ho: Los principios del derecho penal no influyen significativamente en los criterios normativos del juzgador en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017.

Correlaciones

		CRITERIOS NORMATIVOS	PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL
CRITERIOS NORMATIVOS	Correlación de Pearson	1	,492**
	Sig. (bilateral)		,042
	N	198	198
PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL	Correlación de Pearson	,492**	1
	Sig. (bilateral)	,042	
	N	198	198

** . La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).

Interpretación: Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.492 se encuentra dentro de una valoración moderada positiva del mismo modo el significado bilateral (0,042) es menor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, Los principios del derecho penal influyen significativamente en los criterios normativos del juzgador en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017

CAPITULO V

5.1. DISCUSION DE RESULTADOS

La investigación desarrollada se orienta a principios del derecho penal y su influencia en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de pasco-2017, se trata de saber en qué medida se relaciona o no ambas variables.

- En la **TABLA N°13**, Los resultados indican que los principios del derecho penal influye significativamente en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2014-2016. , el significado bilateral (0,010) es menor que el error estimado (0,05), por lo tanto se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna. Estos resultados se relacionan con trabajos previos y teorías relacionadas al tema investigado:

“El objetivo principal del Estado social de Derecho es la obtención del bienestar general aun cuando para tal función recurra a medidas como intervenciones en la actividad privada, expropiaciones por razón de utilidad social y planificación económica, resultan inevitable para promover y desarrollar el mercado en su nueva dimensión internacional, para desplegar las reivindicaciones económicas, sociales y culturales que determinaron el reconocimiento constitucional y el perfeccionamiento en la formulación de los límites en el ejercicio de los derechos fundamentales” (Ansuátegui, 2007: 17). En la interpretación de constituciones “(...) dotadas de un denso contenido sustancial formado por valores, principios, derechos y directrices no es que desaparezcan por completo los límites normativos, pero se atenúan de modo muy notable se hacen más flexibles o dúctiles” (Prieto, 2002: 16).

- **En la Primera Hipótesis específica**, Los resultados de la TABLA N°14 indican que los principios del derecho penal influyen significativamente en la seguridad jurídica en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017., el significado bilateral (0,002) es menor que el error estimado (0,05), por lo tanto se rechaza la Hipótesis nula

y se acepta la Hipótesis alterna. Estos resultados se relacionan con trabajos previos y teorías relacionadas al tema investigado:

De acuerdo con Ossorio (2006), "la Seguridad Jurídica constituye la condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles perjuicio. A su vez, la seguridad limita y determina las facultades y los deberes de los poderes públicos". (p. 873).

Como es lógico, (señala Ossorio, ob. cit.), la Seguridad Jurídica sólo se logra en los Estados de Derecho, porque, en los de régimen autocrático y totalitario, las personas están siempre sometidas a la arbitrariedad de quienes detentan el poder.

- **En la segunda Hipótesis específica**, Los resultados de la TABLA N°15 indican que los principios del derecho penal influyen significativamente en la motivación de las sentencias en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017, el significado bilateral (0,029) es menor que el error estimado (0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Estos resultados se relacionan con trabajos previos y teorías relacionadas al tema investigado.

Jordi Ferrer (2011) afirma que un enunciado que afirma es una de las causas de la decisión o conducta humana es, desde luego, un enunciado descriptivo y, en consecuencia, verdadero o falso. Por ello, la motivación concebida como expresión de los motivos, las causas, de una decisión es un discurso lingüístico descriptivo. Como tal, no es capaz de justificar la decisión, puesto que la justificación pertenece al ámbito de lo normativo y no hay salto posible que permita fundar una conclusión normativa en un conjunto de premisas descriptivas. Con ellas podremos entender, como máximo, qué llevó al juez a decidir cómo decidió, pero no aportará nada a la justificación de su decisión. No es extraño pues que, en general, los realistas no hayan puesto el acento

en la necesidad de que el juez motive sus decisiones, sino en que la sociología del derecho estudie los factores causales que llevan a esas decisiones. Entendida de este modo, resultaría, por ejemplo, que la Constitución española impone a los jueces y tribunales expresar en sus sentencias las motivaciones causales que les llevan a tomar sus decisiones jurisdiccionales. Dado que entre estas motivaciones habrá factores de lo más diversos (que van desde sus traumas infantiles a la presión mediática, desde su ideología a la cultura jurídica adquirida), no se entiende bien qué relevancia social y jurídica tendría para que su expresa formulación fuera exigida constitucionalmente.

- **En la tercera Hipótesis específica,** Los resultados de la TABLA N°16 indican que los principios del derecho penal influyen significativamente en los criterios normativos del juzgador en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017, el significado bilateral (0,042) es menor que el error estimado (0,05), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. Estos resultados se relacionan con trabajos previos y teorías relacionadas al tema investigado.

Según Julián Esteban (2015)

a) DOCTRINAL O PRIVADA. La interpretación doctrinal o privada, es la que llevan a cabo los especialistas o estudiosos del Derecho, es decir los juristas, pero carece de trascendencia si no se la invoca en los fallos de los tribunales.

b) JUDICIAL. Es la que realizan los órganos jurisdiccionales a través de las sentencias, en las que resuelve las contiendas que le son planteados, y en tal sentido el juez constituye el órgano de interpretación de la ley. Esta forma de interpretación carece del poder de obligar, pues como señala Pascual Fiore, las sentencias que pronuncian los tribunales no tiene fuerza de ley, ni se pueden hacer extensivas a otras personas, En nuestro país tiene fuerza obligatoria la jurisprudencia que establece la Suprema Corte de la Nación, funcionando en pleno, y esa obligatoriedad alcanza a las Salas que lo

componen, a los tribunales unitarios y colegiados de Circuito, a los Juzgados de Distrito, a los Tribunales Militares y Judiciales del fuero Común de los Estados, Distrito Federal, tribunales administrativos y de trabajo, locales y federales, siempre que lo resuelto se sustente en cinco sentencias (ejecutorias) no interrumpidas por otra en contrario, y que han sido aprobadas por lo menos por ocho ministros, si se trata de la jurisprudencia de Pleno o por cuatro ministros en los casos de las jurisprudencias de las salas, aunque igualmente constituyan jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de salas y de tribunales colegiados. De igual manera, es obligatoria la jurisprudencia establecida por las salas, en las materias de su competencia, cuando lo resuelto se sustente en cinco ejecutorias, no solo para las mismas salas sino también para todos los tribunales señalados anteriormente.

c) AUTÉNTICA. Es la que realiza la propia ley en su texto, a través de una norma de una naturaleza meramente interpretativa o bien mediante leyes posteriores que cumplan idéntico fin. De allí que se diga que la interpretación auténtica puede ser contextual o posterior. A diferencia de otras, la interpretación auténtica tiene la fuerza obligatoria general.

CONCLUSIONES

- 1.- Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.451 se encuentra dentro de una valoración moderada positiva del mismo modo el significado bilateral (0,010) es menor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, entonces los principios del derecho penal influye significativamente en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2014-2016.
- 2.- Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.417 se encuentra dentro de una valoración moderada positiva del mismo modo el significado bilateral (0,002) es menor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo que se concluye que los principios del derecho penal influyen significativamente en la seguridad jurídica en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 - 2017
- 3.- Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.588 se encuentra dentro de una valoración moderada positiva del mismo modo el significado bilateral (0,029) es menor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, por lo que se concluye que los principios del derecho penal influyen significativamente en la motivación de las sentencias en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017.

4.- Como el coeficiente de correlación tiene un valor de 0.492 se encuentra dentro de una valoración moderada positiva del mismo modo el significado bilateral (0,042) es menor que el error estimado (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir, Los principios del derecho penal influyen significativamente en los criterios normativos del juzgador en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de Pasco, 2015 – 2017

RECOMENDACIONES

- 1.- Se debe promover eventos académicos donde se enfatice sobre los principios del derecho penal que muchas restamos importancia y no la tenemos en cuenta.
- 2.- Los magistrados al momento de emitir sus decisiones judiciales deben tener en cuenta la aplicación de los principios del derecho penal para asegurar la eficacia de dichas decisiones.
- 3.- El derecho penal actualmente es garantista, ahora rigen los valores y principios de la Constitución que prevalecen sobre muchas normas, por lo tanto se debe tener en cuenta.
- 4.- En el marco del nuevo sistema procesal penal nuestros tribunales al momento de aplicar el conjunto de normas deben aplicar e interpretar correctamente el recto sentido de los principios del derecho penal,

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

CUESTIONARIO PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL

PRINCIPIO DE LEGALIDAD		SI	NO
01	¿Según su opinión considera usted que se aplica la garantía criminal en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco?		
02	¿Según su opinión cree usted que existe garantía jurisdiccional en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco?		
PRINCIPIO DE IGUALDAD		SI	NO
03	¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco existe un trato justo?		
04	¿Según su opinión considera usted que se da un proceso justo en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco existe un trato justo?		
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS		SI	NO
05	¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco al imponer una pena se toma en cuenta el principio de idoneidad?		
06	¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se aplica el principio de necesidad cuando se encuentra ausente otros medios alternativos para el logro del objetivo constitucional legítimo?		

CUESTIONARIO DE DECISIONES JUDICIALES

	SEGURIDAD JURIDICA	SI	NO
07	¿Según su opinión cree usted que existe eficacia en las normas?		
08	¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se resuelve un conflicto en el tiempo oportuno?		
	MOTIVACIÓN DE LAS SENTENCIAS	SI	NO
09	¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se emite decisiones apoyándose en el derecho del justiciable?		
10	¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se da un adecuado razonamiento al momento de exponer las razones que motivaron la resolución?		
	CRITERIOS NORMATIVOS	SI	NO
11	¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco existe imparcialidad al momento de emitir sus decisiones judiciales?		
12	¿Según su opinión cree usted que en el Juzgado Penal Liquidador Supra provincial de la Corte Superior de Justicia de Pasco se anticipan a los hechos al momento de decidir?		

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- ALCHOURRÓN Carlos y BULYGIN Eugenio. (1975). Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales. Madrid. Astrea.
- ALEXY, Robert. (1997). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid. Centro de Estudios Políticos y constitucionales.
- ALVA MATTEUCCI, Mario. (2009) “El Principio de Predictibilidad y el Derecho Tributario. Análisis de la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Jurisprudencia de Observancia Obligatoria” Pág. 04.
- BARRIG, Maruja. (1980) La Ley. Lima. Editores CEDYS.
- BERGMAN, Paul. (2000). La defensa en el Juicio. La defensa Penal y la Oralidad. Buenos Aires. Edit. Perrot.
- CARO JOHN, José Antonio. (2007) “Diccionario de Jurisprudencia Penal, Definiciones y conceptos de derecho Penal y Derecho Procesal Penal extraídos de la Jurisprudencia”. Edit. Jurídica Grijley. 1ª Edición. pág. 368.
- CASTILLO ALVA, José. (2008) “Los Precedentes vinculantes en materia penal expedidos por la Corte Suprema de Justicia” contenido en el Libro “Comentarios a los Precedentes Vinculantes en Materia Penal de la Corte Suprema. Editora Jurídica Grijley EIRL. pág. 30.
- CASTILLO ALVA, José Luis. (2012) “Precedentes vinculantes sentencias plenarias y acuerdos plenarios en materia penal de la Corte Suprema de Justicia”, contenido en “Los Precedentes Vinculantes de la Corte Suprema”. Apecc. 2º edición. Pág. 20.
- CASTILLO, Melquíades. (1998). Deontología Forense. Lima. Editores Fecad.

- FIGUEROA GUTARRA, Edwin. “Precedentes vinculantes Consolidación normativa o restricciones a las facultades interpretativas de los Jueces? Pág. 06.
- FONTANET MALDONADO, JULIO. (2002) Principios y Técnicas de la Práctica Forense. Puerto Rico. Edit. Editores.
- NEYRA FORES, José Antonio. Manual del Nuevo proceso Penal de Litigación oral. Perú. Edit. IDEMSA.
- PÁSARA, Luis. (1981) La Crisis de los Jueces Peruanos. Lima. En Apuntes N° 11: 3-21. Universidad del Pacífico.
- PASARA, Luis. (1984). Perú: Administración de ¿Justicia? Lima. En la Administración de Justicia en América Latina.
- RADBRUCH, Gustavo. (1965) Introducción a la Filosofía del Derecho. México. Fondo de Cultura Económica. Tercera Edición.
- REALE, Miguel. (1984) Introducción al Derecho. Madrid. Sexta Edición.
- ROJAS VARGAS, Fidel. (2012) Código Penal –Dos Décadas de Jurisprudencia- ARA Editores. EIRL. Pág. 392.
- ROJAS VARGAS, Fidel. (2002) “Jurisprudencia Penal y Procesal Penal”. Editorial Moreno. S.A. 1° edición. Pág. 1.
- ROMERO SOTO, Julio. (2003).Técnicas Jurídicas de Investigación Penal. Bogotá. Edit Lbrerí.
- RUBIO CORREA, Marcial. (2005) Ideas sobre Qué es Aprender (y Enseñar) Derecho en un Pregrado. Lima. Edit. Fondo Editorial de la PUCP.
- RUBIO CORREA, Marcial. (2005) “Sobre la Importancia de la Jurisprudencia en el Derecho”. Lima. Edit. Fondo Editorial de la PUCP. Pág. 1.

- RUBIO CORREA, Marcial. (2005) “La Interpretación de la Constitución según el Tribunal Constitucional”. Pontificia Universidad Católica del Perú Fondo Editorial. primera edición. Pg. 282.
- STIGLIZ. Joseth. (2002) “El Malestar de la Globalización”. Santillana Ediciones Generales S.L. Pág. 34
- TORRE, Abelardo. (2001) Introducción al Derecho. Buenos Aires, Edit Lexis Nexis.
- TORRES VASQUEZ, Aníbal. (2011) Introducción al Derecho. Perú Edit. Temis.

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PRINCIPIOS DEL DERECHO PENAL Y SU INFLUENCIA EN LAS DECISIONES JUDICIALES EN EL JUZGADO PENAL LIQUIDADOR SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PASCO-2017

PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPOTESIS	VARIABLES	INDICADORES	INSTRUMENTO
PROBLEMA GENERAL ¿En qué medida los principios del derecho penal influyen en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de pasco-2015?	OBJETIVO GENERAL Establecer en qué medida los principios del derecho penal influyen en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de pasco-2015	HIPOTESIS GENERAL Los principios del derecho penal influyen significativamente en las decisiones judiciales en el juzgado penal liquidador supra provincial de la corte superior de justicia de pasco-2016	VARIABLE INDEPENDIENTE Principios del derecho penal	Normativa Motivación	Cuestionario
PROBLEMAS ESPECIFICOS PE₁ ¿Por qué el juzgado penal liquidador supra provincial no determina ni fundamentan debidamente el quantum de la pena al momento de emitir las sentencias judiciales? PE₂ ¿Qué procedimiento técnico valorativo se usa y permite una individualización judicial de las penas privativas de libertad de los condenados en los delitos comunes? PE₃ ¿Qué criterios normativos debe tomar en cuenta el juzgador al momento de individualizar judicialmente las penas en los delitos comunes? PE₄ ¿Por qué es importante lograr establecer los principios del derecho penal que permitan una individualización judicial al emitir una sentencia judicial?	OBJETIVO ESPECIFICO OE₁ Determinar si el juzgado penal liquidador supra provincial no determina ni fundamentan debidamente el quantum de la pena al momento de emitir las sentencias judiciales. OE₂ Establecer qué procedimiento técnico valorativo se usa y permite una individualización judicial de las penas privativas de libertad de los condenados en los delitos comunes OE₃ Analizar qué criterios normativos ha tomado en cuenta el juzgador al momento de individualizar judicialmente las penas en los delitos comunes. OE₄ Establecer por qué es importante lograr establecer los principios del derecho penal que permitan una individualización judicial al emitir una sentencia judicial.	HIPOTESIS ESPECIFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: HE₁ El juzgado penal liquidador supra provincial no determina ni fundamentan debidamente el quantum de la pena al momento de emitir las sentencias judiciales HE₂ El procedimiento técnico valorativo no usa ni permite una individualización judicial de las penas privativas de libertad de los condenados en los delitos comunes. HE₃ Los criterios normativos no toman en cuenta el juzgador al momento de individualizar judicialmente las penas en los delitos comunes. HE₄ Es importante lograr significativamente establecer los principios del derecho penal que permitan una individualización judicial al emitir una sentencia judicial	VARIABLE DEPENDIENTE Las sentencias judiciales	Administración de justicia	Cuestionario